

EXPOTE. NO. 8834

DIRECTO.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



MEXICO

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

2A. OFICIALIA MAYOR

Año de iniciación 1947Núm. 8834

Amparo Directo

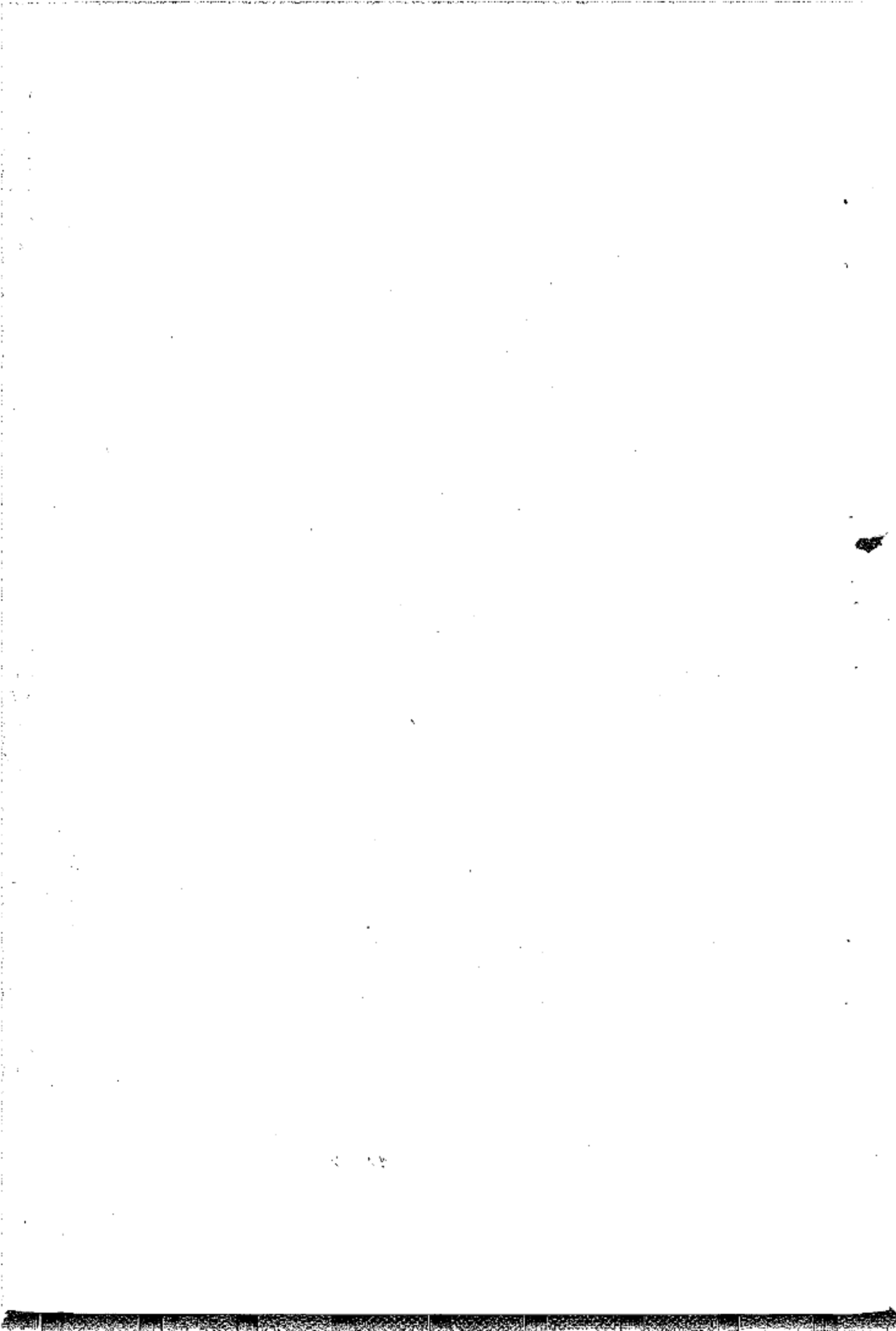
Promovido por González María Luisa.Contra actos de Trib. Sup. de Just. del Territorio Norte de B. Cal.Procedente de B. California.

Fecha de ingreso al archivo



DIRECTO.

EXPOTE. NO. 8834



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



MEXICO

CIVIL

Num. 3834

SEGUNDA.-

1947

OFICIALIA MAYOR

JUICIO DE AMPARO DIRECTO ANTE LA CORTE

SE INICIO EN. 4 de dic. de 1947.

QUEJOSO María Luisa González.

PROMUEVE EN SU NOMBRE.

AUTORIDADES } Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Terr. Norte de la Baja California.

RESPONSABLES }

ACTO RECLAMADO } Sentencia de 24 de octubre de 1947, dictada en el toca a la apelación interpuesta por Luis Bonardi, en el juicio ordinario civil seguido por la quejosa, en c/ del citado Bonardi, etc.

LA SUSPENSIÓN DEL ACTO FUE

GARANTIAS VIOLADAS 14 y 16 constitucionales.

TERCERO PERJUDICADO Luis Bonardi.

FECHA DE LA EJECUTORIA

SE RESOLVIÓ QUE

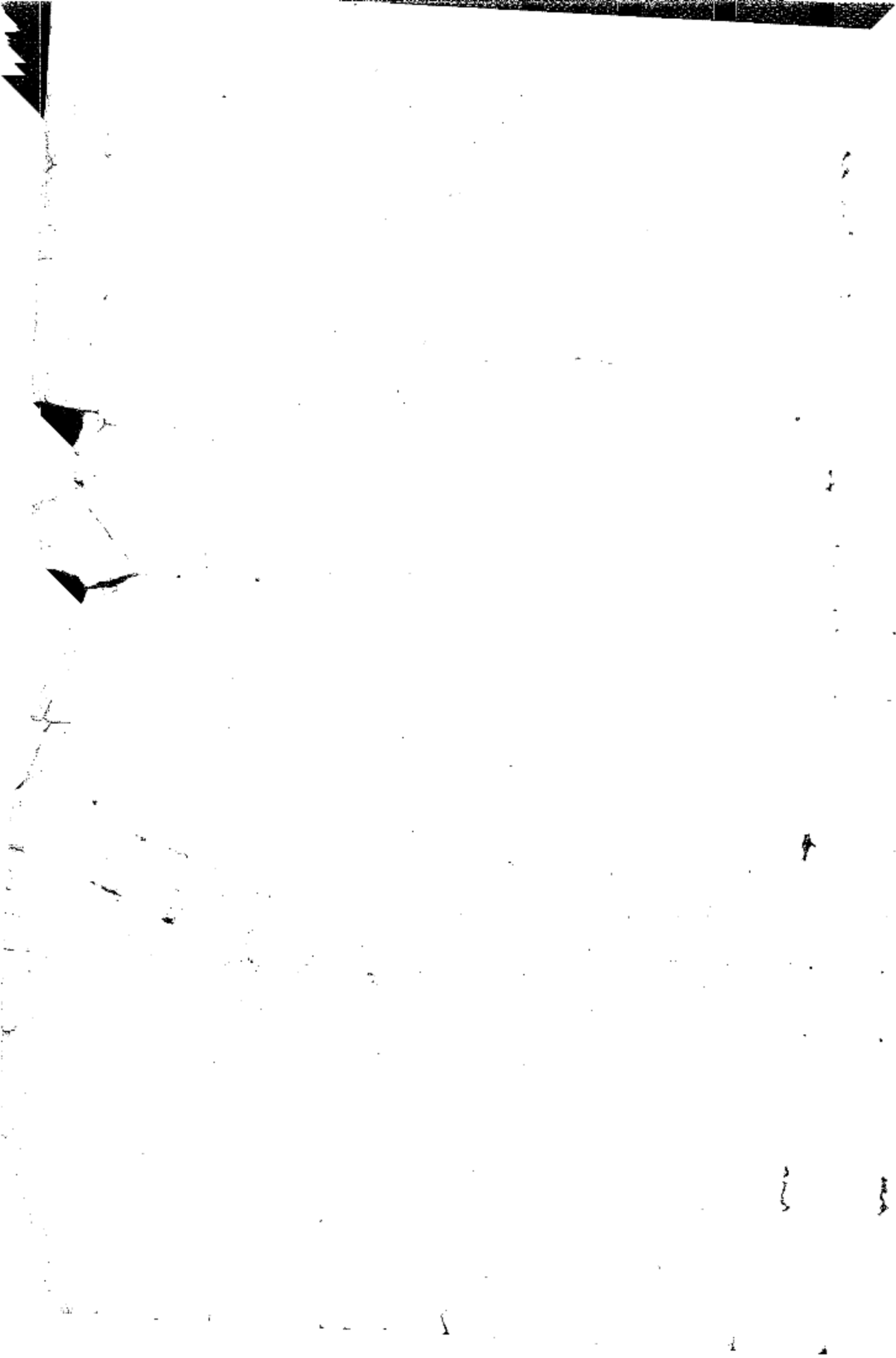
FECHA EN QUE SE ARCHIVA

H.B.

ACTUANCIA



CIVIL





SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. C.F.A.

ASUNTO: Se remiten originales, demanda de amparo y expediente y se rinde informe justificado.

C. Srio. de Acuerdos de la H. Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
México, D.F.

OFICIO No. 858

Constante en tres cuadernos de 56, 12 y 58 fojas útiles — respectivamente, remito a usted original y por vía de constancias — el expediente del Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio seguido — ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ensenada, Baja California, por la señora María Luisa González en contra de Luis Bonardi.

Igualmente remito a usted el original y una copia simple — de la demanda de amparo directo formulada por María Luisa González contra actos de ésta Sala consistentes en la ejecutoria pronunciada en el Toca relativo al recurso de apelación que interpuso el — señor Luis Bonardi en el Juicio de referencia, informe justificado que ordena el artículo 107 fracción VII de la Constitución Federal y copia certificada de la ejecutoria recurrida, permitiéndome manifestarle que con fecha 26 del actual a las 14 horas se emplazó al — tercer perjudicado por conducto del señor Roberto Chacón, persona — autorizada expresamente por el señor Luis Bonardi para oír notificaciones y recibir documentos, con entrega de una de las copias — simples de la demanda de amparo.

Al suplicarle me acuse el recibo correspondiente, le reitero mi consideración atenta.

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

Dic 4 9 31 AM '47

OFICINA DE
CELEBRACION
Y COORDINACION

Recibido por correo, con la demanda de amparo en cinco fojas, copia al carbón de la misma, copia certificada en siete fojas, informe de ley y tres cuadernos, en cincuenta y siete, doce y cincuenta y ocho fojas respectivamente.

sol.

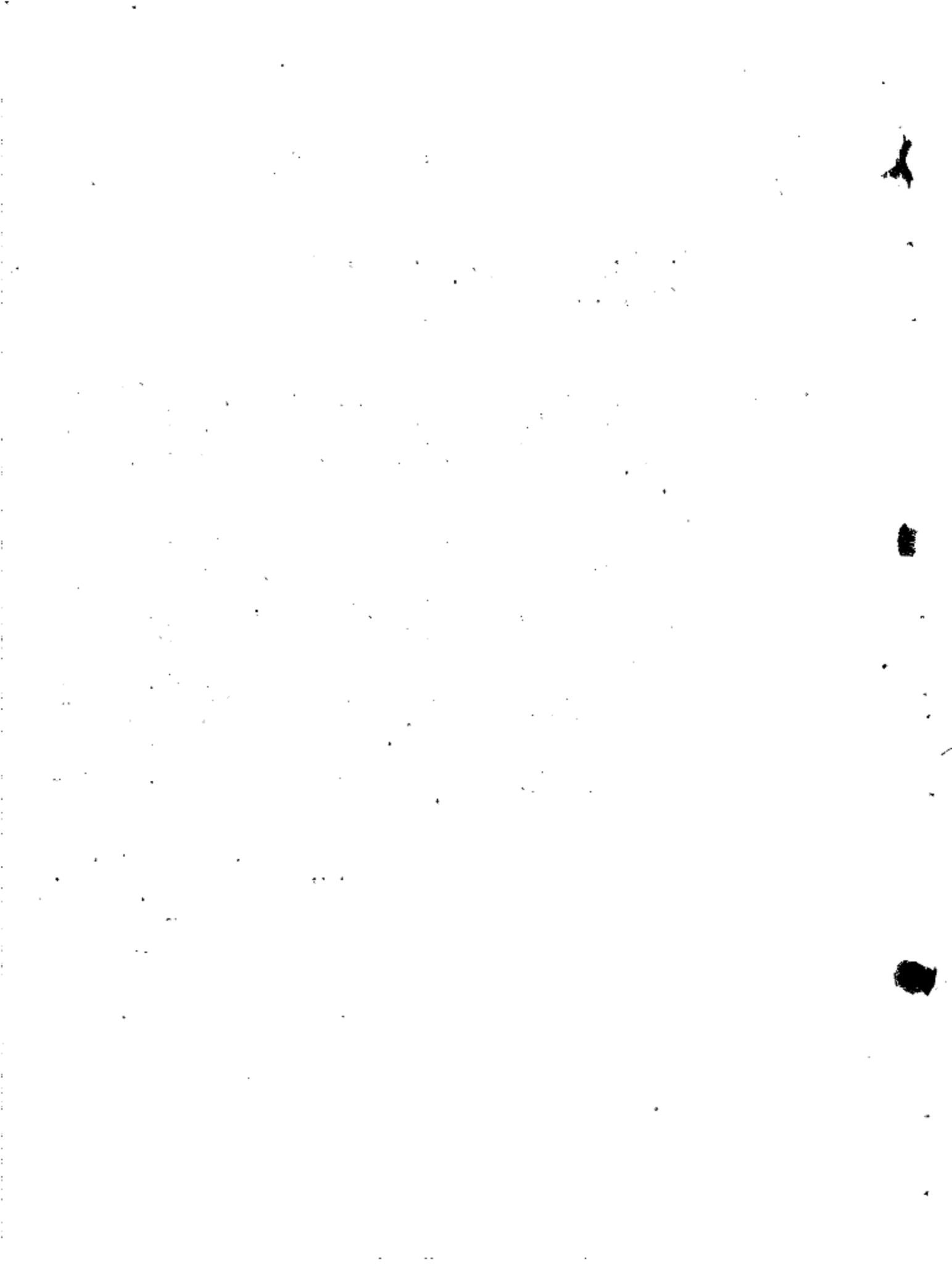
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

Mexicali, B.C., a 27 de noviembre de 1947.
EL PRESIDENTE DE LA SALA.

Chavez
LIC. ARTURO MONGES SANCHEZ

Quadrón

[Handwritten signature and stamp]



H.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

MEXICO, D. F.

MARIA LUISA GONZALEZ, mexicana por nacimiento, por mi propio derecho y señalando para recibir notificaciones en esa ciudad el despacho del Sr. Lic. CARLOS ARELLANO, ubicado en San Ildefonso 47, Altos 14, ante esa H. Suprema Corte acudo y expengo:

Que vengo a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en este Territorio, por violaciones de las garantías individuales consignadas en los artículos 14 y 16 Constitucionales.-En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Amparo vigente; manifiesto:

I.-MI NOMBRE y DOMICILIO:-Ser los mismos arriba expresados.- II.-TERCER PERJUDICADO:-El Sr. Luis Bonardi, con domicilio bien conocido en esta ciudad, en el "Café Bonardi".-

III.-AUTORIDAD RESPONSABLE:-La Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Territorio Norte de la Baja California, con domicilio oficial en el Palacio de Justicia, en Mexicali, B.C.

IV.-ACTO RECLAMADO:-La sentencia definitiva de fecha 24 de Octubre del presente año, dictada por dicha Sala en el Toca relativo a la apelación que interpuso el Sr. Luis Bonardi contra la sentencia que pronunció el C. Juez de Primera Instancia de este Partido Judicial de Ensenada, B.C. en el juicio ordinario civil que promoví en contra del mencionado Sr. Bonardi, a fin de que se me declarase propietaria, por prescripción, de las manzanas de terreno números 128 y 146 de la Colonia "Coronita", ubicada en esta jurisdicción, mismas manzanas de terreno que se encuentran inscriptas en el Registro Público de la Propiedad de este propio Partido, a nombre del demandado.-Acompaño copia certificada de la sentencia de segunda instancia, contra la cual interpongo este amparo y la cual me fué notificada el día 27 de Octubre anterior, por conducto del Sr. Andrés E. Núñez, autorizado por mí para el efecto.-

V.-FECHA DE NOTIFICACION DE LA SENTENCIA RECURRIDA:-Ya está indicada en el párrafo anterior.-

VI.-LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE CONTIENEN LAS GARANTIAS INDIVIDUALES QUE ESTIMO VIOLADAS:- Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

VII.-FUNDAMENTO DE LA DEMANDA:-La fracción I del artículo 10. de la Ley de Amparo.-

ANTECEDENTES:

Desde el año de 1930 me encuentro en posesión de las manzanas de terreno números 128 y 146 de la Colonia "Coronita" ubicada en la jurisdicción de Ensenada, Territorio Norte de la Baja California, siendo mi posesión pacífica, continua, pública y en carácter de propietaria.-

Como en el año de 1945 tuve conocimiento de que dichas manzanas de terreno se encontraban inscritas en el Registro Público de la Propiedad, correspondiente a la Delegación de Ensenada, B. C., a nombre del Sr. LUIS BONARDI, haciendo uso del derecho que me concede el art. 1.156 del Código Civil, promoví juicio ordinario civil en contra del mencionado Sr. Bonardi, ante el Juzgado de Primera Instancia de este Partido, con el objeto de que se me declarase propietaria, por prescripción, de esos terrenos; y como el demandado no radicaba en este lugar del juicio e ignoraba yo su domicilio, pedí que se le hiciera el emplazamiento de Ley por medio de edictos que se publicaron en la forma que previene el art. 122 del Código de Procedimientos Civiles.

Dentro del término señalado para contestar la demanda, compareció ante el Juzgado que se avocó del conocimiento del juicio el Sr. Lic. Carlos Rosales Miranda, ostentándose como apoderado del Sr. Luis Bonardi y contestó la demanda, opuso excepciones y formuló contra-demanda ejercitando la acción reivindicatoria.-

Se siguió el juicio por todos sus trámites hasta la sentencia que dictó el Juez de los autos, en la que declaró procedente la acción ejercitada por mí y me declaró propietaria, por prescripción, de los terrenos mencionados.-

Como quiera que el apoderado del Sr. Bonardi interpusiera el recurso de apelación contra esa sentencia de primera instancia, los autos pasaron a la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales y más tarde fueron remitidos a la Sala de nueva creación, en este Territorio Norte de la Baja California, con asiento oficial en Mexicali, B. C., la que, con fecha 24 de Octubre próximo pasado, dictó sentencia revocando la de primera instancia y resolviendo -- que no ha lugar a declarar que han prescrito en mi favor las man

zanas de terreno motivo del juicio, pues la Sala considero que no había yo probado la acción intentada y que en cambio el demandado había probado la acción reivindicatoria ejercitada en vía de reconvencción.- En consecuencia la Sala sentenciadora reconoce que el Sr. Bonardi tiene el dominio absoluto sobre las referidas manzanas de terreno y por lo tanto me condena a la entrega de las mismas, con todos sus llenos, útiles, semovientes, construcciones, frutos naturales, civiles e industriales, mejoras y acciones que se hayan obtenido a partir del 10 de agosto de 1941, así como al pago de los menoscabos sufridos (?) en los terrenos de que se trata y al pago también de los gastos y costas de ambas instancias.-

CONCEPTOS DE VIOLACION:

PRIMERO:-Considero que la sentencia pronunciada por la Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en este Territorio, con fecha 24 de Octubre del presente año, en el Toca relativo a la apelación interpuesta por el apoderado del Sr. Luis Bonardi contra el fallo que dictó el C. Juez de Primera Instancia de este Partido Judicial en el juicio a que me he referido, es violatoria de las garantías individuales contenidas en el artículo 14 Constitucional, porque no se apega a las letra ni a la interpretación jurídica de la Ley.- En efecto, en el CONSIDERANDO I de dicha sentencia, la Sala afirma que el Juez "a quo" introdujo al debate un hecho nuevo, no alegado por mí en la demanda, cual es el de que yo era amasía de Manzuetto del Giorgio. Por esta circunstancia la Sala consideró violados los artículos 81, 268, 272, 279, 281, 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles y los artículos 10., 1.135, 1.139, 1.149, 1.151, 1.152, 1.156 y 1.157 del Código Civil.-

Carece de razón la Sala al considerar violados los preceptos que cita, pues basta la simple lectura de ellos para darse cuenta de que no fueron contravenidos por el sólo hecho de que el C. Juez de los autos decretó la práctica de una diligencia de prueba para mejor proveer. Al decretar el C. Juez la práctica de esa diligencia, lo hizo con apoyo en la amplia facultad que a los Tribunales concede el art. 279 del Código de Procedimientos Civiles, y por lo tanto, indebidamente, sostiene

ne la autoridad que señalo como responsable que el Juez "a quo" procedió ~~contra-la-Ley~~, pues de aceptar el criterio de la Sala, se coartaria la facultad que la Ley expresamente concede al juzgador.-

Es cierto que no dije en mi demanda que hubiese sido yo amasia de Manzuetto del Giorgio, pues no consideré necesario mencionar una cuestión extrictamente íntima; pero cuando se me interrogó sobre el particular, tuve que decir la verdad, y si ello sirvió al C. Juez de los autos para normar su criterio, es cosa que debe respetarse, ya que si la Ley ha establecido esa facultad para el juzgador, es precisamente para que tenga libertad de acción y pueda llegar al conocimiento de la verdad.

En esas condiciones resulta impropio que la Sala califique de oficiosa la actitud del Juez a quo, por el hecho de que éste haya decretado el exámen de los testigos Dr. Pedro Loyola Lucq y Luis Grandi. Y si la diligencia decretada aportó o no alguna luz para llegar al conocimiento de los puntos cuestionados, es cosa que, después de todo, no importa o no afecta al fondo de la cuestión a debate, que en esencia se concreta solamente a esclarecer si se han realizado o no las condiciones necesarias para la prescripción adquisitiva en mi favor, y para ello son otros los aspectos que debió examinar la Sala, ya que, la circunstancia de que yo haya sido o no amasia de Manzuetto del Giorgio, en nada altera los hechos en que fundo mi demanda y cuyos hechos fueron los que me concreté a probar y creó haberlo logrado. De manera, pues, que ese "elemento nuevo" que la Sala afirma se introdujo al debate no sólo no desvirtúa la acción por mí ejercitada, sino que la reafirma.-

SEGUNDO:-En el punto II; es decir: en el Considerando II de la sentencia de que me quejo, la Sala afirma que el Juez a quo modificó substancialmente los hechos alegados por mí y que violó el art. 281 del Código de Procedimientos Civiles; pero como ya dije en los párrafos precedentes, considero que la circunstancia de que el Juez de los autos haya decretado la práctica de una diligencia haciendo uso de la facultad que la Ley le concede, no modifica los hechos ex-

puestos en la demanda, ni menos entraña ninguna violación al precepto procesal citado, toda vez que por mi parte me apegué a dicha disposición, aportando pruebas que justificaron la acción por mí ejercitada.-

TERCERO: Tampoco puede quedar desvirtuado el derecho que me asiste para adquirir por prescripción, por la circunstancia de que el Juez de los autos haya sustentado la tesis de que Manzuetto del Giorgio fué poseedor del terreno de que se trata y de que me considere como causahabiente de éste. Yo me concreté a sostener la validez de mis derechos posesorios; comprobé con las declaraciones de varios testigos idóneos y de reconocida honorabilidad, la verdad de los hechos expresados en mi demanda y eso es bastante para haber obtenido sentencia favorable. Si el Juez de los autos descubrió otros aspectos de la cuestión a debate y quiso abordarlos al fallar, es cosa que no debe, ni puede perjudicarme, ni pudo eso servir de fundamento a la Sala para desconocer mis derechos, porque entonces es ella, la que elucubrando sobre una cuestión distante a la planteada por mí, trata de desconocer los hechos esenciales a que me referí en mi demanda y que sirvieron de base a la acción de prescripción que ejercité con apoyo en los preceptos legales invocados en mi propia demanda.- En cambio nada dice la Sala en su resolución de lo declarado por los testigos Hugo Garnier, Juan Luna, Blas Burquez, Carlos Burquez, Melchor Camilleri y Juan Businaro, todos los cuales declararon uniformes y contestes sobre los hechos referidos en mi repetida demanda.- Por eso al desestimar la Sala esta prueba, viola en mi perjuicio los artículos 419 y 424 del Código de Procedimientos Civiles.

CUARTO: En el mismo punto a que me estoy refiriendo, la Sala estima que la sentencia de primera instancia violó los artículos 1281, 1282 y 1635 del Código Civil que se refieren a la transmisión de derechos sucesorios, afirmando que los derechos de posesión se transmiten por herencia. Considero que la Sala incurre en un error, pues ni yo me he ostentando como heredera de Manzuetto del Giorgio, ni es el caso de transmisión de derechos por herencia.- Se trata de la aplicación del artículo 1149 del Código Civil, que dice: "QUE EL QUE PRESCRIBE PUEDE COMPLETAR EL TERMINO NECESARIO PARA SU PRESCRIPCION, REUNIENDO

AL TIEMPO QUE HAYA POSEIDO, EL QUE POSEYO LA PERSONA QUE LE TRANSMITIO LA COSA" Este es el principio legal que el Juez de los autos estimó pertinente aplicar en el caso, sin perjuicio, naturalmente, de lo dicho y probado por mí.-

QUINTO:-En el mismo punto a que hago alusión, la Sala dá por hecho, aunque no hay prueba alguna sobre el particular, que Manzuetto del Giorgio era extranjero, y bajo ese supuesto afirma que éste no podía poseer un bien inmueble en la zona prohibida para los extranjeros por la fracción I del art. 27 Constitucional. Pero es el caso que el citado precepto no se refiere A LA POSESION sino a la PROPIEDAD de bienes raíces. Además la Sala dá por cierto que los terrenos en cuestión se encuentran en la zona prohibida para los extranjeros sin que tampoco exista prueba de ello en autos. Como la Sala se funda en esas consideraciones para revocar la sentencia del inferior, viola en mi perjuicio la garantía individual consagrada en el art. 14 Constitucional, pues no se apega a la letra, ni a la interpretación jurídica de la Ley.-

SEXTO:-Al analizar la Sala los conceptos de violación expresados por el Sr. Bonardi, sostiene que debe existir congruencia entre la acción, la excepción y la sentencia, agregando que el actor debe probar los hechos en que funda su acción y el demandado aquellos en que funda su excepción.-En el caso de que se trata quedaron por mi parte satisfechos esos requisitos, puesto que yo ejercité la acción de prescripción; presenté pruebas para acreditar los fundamentos de aquella y el Juez de los autos consideró buenas mis pruebas y no así las del demandado, ya que sus testigos no declararon uniformemente. Por lo tanto, la sentencia es congruente con la demanda y apegada a la Ley. No hay entonces motivo para que la Sala se escoja a la circunstancia de que el Juez a quo mandó se practicara una diligencia de prueba para mejor proveer, para considerar por ello, violados los preceptos legales que menciona la autoridad responsable.-

SEPTIMO:-Como la Sala insiste en sostener que Manzuetto del Giorgio no podía poseer inmuebles en la zona prohibida para los extranjeros por la fracción I del art. 27 Constitucional y dá por probado que éste era extranjero, fundándose para ello en la existencia de una carta escrita en idioma ita-

liano y dirigida por Luis Bonardi a del Giorgio, cabe preguntarse, entonces, no hizo la misma consideración respecto al propio Bonardi que es el autor de esa carta; quién también lleva apellido italiano y que no ha probado en autos ser mexicano?

Aunque yo no he pretendido ser causahabiente de del Giorgio, ya que el Juez de los autos así lo considera y tuvo por buena la posesión de éste, es preciso sostener que la fracción I del art. 27 Constitucional sólo prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas; pero, repito, que el precepto Constitucional invocado, no prohíbe a los extranjeros que ejerzan la posesión de tierras y aguas en la zona indicada. Como la Sala dió a éste precepto una interpretación antijurídica y en ello se funda para revocar la sentencia que me favorece, viola en mi perjuicio el art. 14 Constitucional.-

OCTAVO:-La autoridad responsable dá por probado el hecho de que Manzuetto del Giorgio era aparcerero de Bonardi, y al hacerlo, dejó de observar las reglas relativas a la estimación de las pruebas, ya que los contratos de aparcería deben constar precisamente por escrito y como el demandado no exhibió el contrato de aparcería que dijo había existido entre él y Manzuetto del Giorgio, no debió la Sala tener por probado ese hecho, tanto más cuanto que ^{de} los testigos que sobre el particular depusieron, nadie pudo proporcionar datos precisos sobre la existencia real de ese contrato.-

NOVENO:-En los considerandos III y IV de la sentencia de que me quejo, la Sala responsable, haciendo suyos los argumentos de la parte apelante, sostiene que la posesión que ejerzo sobre los terrenos de que se trata es de mala fé y que por lo tanto el término para la prescripción debe ser de diez años. Suponiendo, sin conceder, que mi posesión sea de mala fé, los diez años requeridos por la Ley para prescribir, transcurrieron con exceso desde el año de 1930 en que comenzó mi posesión hasta el de 1945 en que se inició el juicio.- Como la Sala no tuvo en cuenta las pruebas rendidas por mí para probar ese hecho, dejó de observar los preceptos legales relativos al valor de la prueba y por lo tanto violó en mi perjuicio

cio el art. 14 Constitucional.-En cambio, dicha Sala consideró probados los derechos de propiedad de los terrenos en cuestión en favor del demandado Luis Bonardi, con la sola presentación de una copia certificada del Registro Público de la Propiedad relativa a la inscripción de esos terrenos a nombre de Bonardi; pero como la propiedad debe comprobarse con la cadena de títulos que demuestren el enlace perfecto de las enagenaciones hasta llegar a la escritura última, considero que los derechos de propiedad de Bonardi no están bien probados.

DECIMO:-Consecuente la Sala con el criterio que sustenta, me condena a entregar a Bonardi "la finca expresada, con todas sus construcciones, edificios, muebles y semovientes, útiles y objetos de labranza, frutos naturales, civiles e industriales, mejoras y accesiones, etc. etc."

Al resolver la Sala en ese sentido, ni siquiera tuvo en cuenta lo dispuesto por el art. 813 del Código Civil.

DECIMO-PRIMERO:-La autoridad responsable no concedió ningún valor a mis pruebas, ni tomó en cuenta los alegatos formulados por mí en la primera instancia; pero en cambio concedió un valor absoluto a las declaraciones de los testigos presentados por mi contrario, no obstante que entre ellos no hubo dos que declararan en el mismo sentido, aparte de que sus declaraciones versaron sobre hechos sin relación directa con la cuestión debatida, y algunas afirmaciones de los testigos resultan inverosímiles, como por ejemplo esa que la misma Sala menciona y que se refiere a las vides que Bonardi asegura sembró en los terrenos de que se trata, pues se afirmó que dichas vides estaban plantadas a tres pies de distancia una de otra, lo cual hace evidente la falsedad de los testigos que tal cosa afirmaron, porque las vides jamás se plantan a esa distancia, sino a una mucho mayor.

DECIMO-SEGUNDO:-En el Considerando V de la sentencia de que me quejo, la Sala insiste en sostener que soy poseedora de mala fé, por haber ocupado sin título alguno el terreno en disputa y porque al promover juicio en contra de Bonardi, dije que ignoraba su domicilio.-

Ambas consideraciones carecen de razón; la primera por que para que la posesión sea de buena fé, no se necesita precisamente tener título escrito; basta con que se entre

a la posesión a título de propietario, en forma pacífica con ánimo de hacerse dueño de la cosa. Por lo que toca a que yo sabía cual era el domicilio de Bonardi, es una suposición gratuita de la Sala, que ni el mismo demandado denunció al contestar la demanda, porque en efecto hacía muchos años que el citado Bonardi no se aparecía por esta población, y cuando yo promoví el juicio en su contra, aún no residía en esta propia ciudad. Fue por ello que contestó a través de un apoderado. Además, éste, en su escrito de contestación a la demanda, dice textualmente "QUE HASTA ENTONCES PUDO VENIR". Es decir, hasta que supo del juicio vino a esta ciudad.

Por otra parte el procedimiento adoptado por mí es perfectamente legal, por lo que al considerarlo la Sala de mala fé, usa de un criterio contrario al texto expreso de la Ley.

DECIMO-TERCERO:-En el inciso c) del Considerando V de la sentencia, la Sala, sin fundamento alguno califica de falsos a los testigos Hugo Garnieri, Melchor Camilleri, Juan Businaro, Blas Burquez, Juan Luna, David Goldbaum Banuett y Carlos Burquez que yo presenté y muchos de los cuales, precisamente por ser paisanos de Bonardi y de Manzuetto del Giorgio, conocían perfectamente la verdadera historia del terreno que posee y en el cual trabajó conmigo el último, así como las razones por las cuales Bonardi jamás se presentó antes de 1945 con pretensiones de apoderarse de ese terreno que yo había estado, como lo estoy hasta la fecha, poseyendo a nombre propio y siendo reconocida como dueña por todos los habitantes de la región.-

DECIMO-CUARTO:-Per último, considera la Sala como elemento demostrativo de la mala fé que me atribuye, el hecho de que yo haya promovido una información ad-perpetuam para acreditar la posesión que he ejercido sobre los terrenos de que se trata.- Sobre el particular debo decir que si hice eso, fue porque así me lo sugirió un abogado, y creo que estuvo bien hecho, pues de lo contrario el Juzgado no habría dado curso a mi promoción.- Entonces, si esa información ad-perpetuam estuvo apegada a la Ley y si no existe sentencia alguna que la haya declarado nula o fraudulenta, no puede la Sala considerarla como tal, y al hacerlo, deja de apegarse a la Ley y viola

en mi perjuicio las garantías individuales de que ya hice mérito.-

DECIMO-QUINTO:-Al revocar la Sala del Tribunal Superior de Justicia en este Territorio, la sentencia pronunciada por el C. Jues de Primera Instancia de este Partido en el juicio ordinario civil seguido por mí en contra de Luis Bonardi y al condenarme en los términos que se expresan en la sentencia dictada por dicha Sala con fecha 24 de Octubre del presente año, me causa molestias en mi posesiones, sin que esté fundada y motivada legalmente la causa del procedimiento; por lo tanto, viola en mi perjuicio las garantías individuales consagradas por el art. 16 Constitucional, en su parte relativa y me obliga por ello a impetrar la protección de la Justicia Federal.

Por todo lo expuesto y con fundamento en los artículos 158, 161, 166, 167, 170, 173, 176, 179, 183, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo,

PIDO y SUPlico a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sirva:

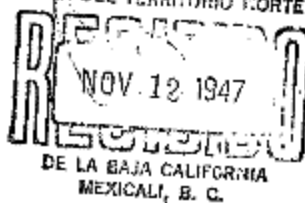
1o.-Tenerme por presentada en tiempo y forma, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, con jurisdicción en el Territorio Norte de la Baja California, consistentes en la sentencia a que hago mérito en este escrito; y

2o.-Previa la substanciación del juicio correspondiente, dictar su respetable fallo declarando que la Justicia de la Unión me ampara y protege contra la sentencia de que me quejo.

Protesto lo necesario.-

ENSENADA, Baja Calif., a 10 de noviembre de 1947.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DEL TERRITORIO NORTE



Maria Luisa González
Maria Luisa González.

siendo las 13 hs.
Conste

con la copia sent. def. y
4 copias de la misma devu-
da

EL SECRETARIO DE ACUERDOS HACE CONSTAR: QUE LA RESOLUCION ACORDADA FUE NOTIFICADA A LA QUEJOSA CON FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO POR CONDUCTO DEL SEÑOR ANDRES E. VILLALBA, AUTORIZADO PARA OIR NOTIFICACIONES POR LA SRA. MARIA LUISA GONZALEZ.-MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE.

EL SRIO. DE ACUERDOS.

LIC. RODOLFO SOSA Y SILVA.

SALA DEL TERRITORIO NORTE DE LA B. C.F.A.

H.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

MEXICO, D. F.

MARIA LUISA GONZALEZ, mexicana por nacimiento, por mi propio derecho y señalando para recibir notificaciones en esa ciudad el despacho del Sr. Lic. CARLOS ARELLANO, ubicado en San Ildefonso 47, Altos 14, ante esa H. Suprema Corte acudo y expongo:

Que vengo a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en este Territorio, por violaciones de las garantías individuales consignadas en los artículos 14 y 16 Constitucionales.-En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Amparo vigente, manifiesto:

I.-MI NOMBRE y DOMICILIO:-Ser los mismos arriba expresados.- II.-TERCER PERJUDICADO:-El Sr. Luis Bonardi, con domicilio bien conocido en esta ciudad, en el "Café Bonardi".-

III.-AUTORIDAD RESPONSABLE:-La Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Territorio Norte de la Baja California, con domicilio oficial en el Palacio de Justicia, en Mexicali, B.C.

IV.-ACTO RECLAMADO:-La sentencia definitiva de fecha 24 de Octubre del presente año, dictada por dicha Sala en el Toca relativo a la apelación que interpuso el Sr. Luis Bonardi contra la sentencia que pronunció el C. Juez de Primera Instancia de este Partido Judicial de Ensenada, B.C. en el juicio ordinario civil que promoví en contra del mencionado Sr. Bonardi, a fin de que se me declarase propietaria, por prescripción, de las manzanas de terreno números 128 y 146 de la Colonia "Coronita", ubicada en esta jurisdicción, mismas manzanas de terreno que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad de este propio Partido, a nombre del demandado.-Acompaño copia certificada de la sentencia de segunda instancia, contra la cual interpongo este amparo y la cual me fue notificada el día 27 de Octubre anterior, por conducto del Sr. Andrés E. Núñez, autorizado por mí para el efecto.-

V.-FECHA DE NOTIFICACION DE LA SENTENCIA RECURRIDA:-Ya está indicada en el párrafo anterior.-

VI.-LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE CONTIENEN LAS GARANTIAS INDIVIDUALES QUE ESTIMO VIOLADAS:- Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII.-FUNDAMENTO DE LA DEMANDA:-La fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo.-

A N T E C E D E N T E S :

Desde el año de 1930 me encuentro en posesión de las manzanas de terreno números 128 y 146 de la Colonia "Coronita" ubicada en la jurisdicción de Ensenada, Territorio Norte de la Baja California, siendo mi posesión pacífica, continua, pública y en carácter de propietaria.-

Como en el año de 1945 tuve conocimiento de que dichas manzanas de terreno se encontraban inscritas en el Registro Público de la Propiedad, correspondiente a la Delegación de Ensenada, B. C., a nombre del Sr. LUIS BONARDI, haciendo uso del derecho que me concede el art. 1.156 del Código Civil, promoví juicio ordinario civil en contra del mencionado Sr. Bonardi, ante el Juzgado de Primera Instancia de este Partido, con el objeto de que se me declarase propietaria, por prescripción, de esos terrenos; y como el demandado no radicaba en este lugar del juicio e ignoraba yo su domicilio, pedí que se le hiciera el emplazamiento de Ley por medio de edictos que se publicaron en la forma que previene el art. 122 del Código de Procedimientos Civiles.

Dentro del término señalado para contestar la demanda, compareció ante el Juzgado que se avocó del conocimiento del juicio el Sr. Lic. Carlos Rosales Miranda, ostentándose como apoderado del Sr. Luis Bonardi y contestó la demanda, opuso excepciones y formuló contra-demanda ejercitando la acción reivindicatoria.-

Se siguió el juicio por todos sus trámites hasta la sentencia que dictó el Juez de los autos, en la que declaró procedente la acción ejercitada por mí y me declaró propietaria, por prescripción, de los terrenos mencionados.-

Como quiera que el apoderado del Sr. Bonardi interpusiera el recurso de apelación contra esa sentencia de primera instancia, los autos pasaron a la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales y más tarde fueron remitidos a la Sala de nueva creación, en este Territorio Norte de la Baja California, con asiento oficial en Mexicali, B. C., la que, con fecha 24 de Octubre próximo pasado, dictó sentencia revocando la de primera instancia y resolviendo -- que no ha lugar a declarar que han prescrito en mi favor las man

zanas de terreno motivo del juicio, pues la Sala considero que no habia yo probado la acción intentada y que en cambio el demandado habia probado la acción reivindicatoria ejercitada en vía de reconvencción.- En consecuencia la Sala sentenciadora reconoce que el Sr. Bonardi tiene el dominio absoluto sobre las referidas manzanas de terreno y por lo tanto me condena a la entrega de las mismas, con todos sus llenos, útiles, semovientes, construcciones, frutos naturales, civiles e industriales, mejoras y accesiones que se hayan obtenido a partir del 10 de agosto de 1941, así como al pago de los menoscabos sufridos (?) en los terrenos de que se trata y al pago también de los gastos y costas de ambas instancias.-

CONCEPTOS DE VIOLACION:

PRIMERO:-Considero que la sentencia pronunciada por la Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en este Territorio, con fecha 24 de Octubre del presente año, en el Toca relativo a la apelación interpuesta por el apoderado del Sr. Luis Bonardi contra el fallo que dictó el C. Juez de Primera Instancia de este Partido Judicial en el juicio a que me he referido, es violatoria de las garantías individuales contenidas en el artículo 14 Constitucional, porque no se apega a las letra ni a la interpretación jurídica de la Ley.- En efecto, en el CONSIDERANDO I de dicha sentencia, la Sala afirma que el Juez "a quo" introdujo al debate un hecho nuevo, no alegado por mí en la demanda, cual es el de que yo era amasia de Manzuetto del Giorgio. Por esta circunstancia la Sala consideró violados los artículos 81, 268, 272, 279, 281, 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles y los artículos 10., 1.135, 1.139, 1.149, 1.151, 1.152, 1.156 y 1.157 del Código Civil.-

Carece de razón la Sala al considerar violados los preceptos que cita, pues basta la simple lectura de ellos para darse cuenta de que no fueron contravenidos por el sólo hecho de que el C. Juez de los autos decretó la práctica de una diligencia de prueba para mejor proveer. Al decretar el C. Juez la práctica de esa diligencia, lo hizo con apoyo en la amplia facultad que a los Tribunales concede el art. 279 del Código de Procedimientos Civiles, y por lo tanto, indebidamente, sostiene

ne la autoridad que señalo como responsable que el Juez "a quo" procedió ~~contra-la-ley~~, pues de aceptar el criterio de la Sala, se coartaría la facultad que la Ley expresamente concede al juzgador.-

Es cierto que no dije en mi demanda que hubiese sido yo amasia de Manzuetto del Giorgio, pues no consideré necesario mencionar una cuestión extríctamente íntima; pero cuando se me interrogó sobre el particular, tuve que decir la verdad, y si ello sirvió al C. Juez de los autos para normar su criterio, es cosa que debe respetarse, ya que si la Ley ha establecido esa facultad para el juzgador, es precisamente para que tenga libertad de acción y pueda llegar al conocimiento de la verdad.

En esas condiciones resulta impropio que la Sala califique de oficiosa la actitud del Juez a quo, por el hecho de que éste haya decretado el exámen de los testigos Dr. Pedro Loyola Lucq y Luis Grandi. Y si la diligencia decretada aportó o no alguna luz para llegar al conocimiento de los puntos cuestionados, es cosa que, después de todo, no importa o no afecta al fondo de la cuestión a debate, que en esencia se concreta solamente a esclarecer si se han realizado o no las condiciones necesarias para la prescripción adquisitiva en mi favor, y para ello son otros los aspectos que debió examinar la Sala, ya que, la circunstancia de que yo haya sido o no amasia de Manzuetto del Giorgio, en nada altera los hechos en que fundo mi demanda y cuyos hechos fueron los que me concreté a probar y creo haberlo logrado. De manera, pues, que ese "elemento nuevo" que la Sala afirma se introdujo al debate no sólo no desvirtúa la acción por mí ejercitada, sino que la reafirma.-

SEGUNDO:-En el punto II; es decir: en el Considerando II de la sentencia de que me quejo, la Sala afirma que el Juez a quo modificó substancialmente los hechos alegados por mí y que violó el art. 281 del Código de Procedimientos Civiles; pero como ya dije en los párrafos precedentes, considero que la circunstancia de que el Juez de los autos haya decretado la práctica de una diligencia haciendo uso de la facultad que la Ley le concede, no modifica los hechos ex-

puestos en la demanda, ni menos entraña ninguna violación al precepto procesal citado, toda vez que por mi parte me apegué a dicha disposición, aportando pruebas que justificaron la acción por mí ejercitada.-

TERCERO:-Tampoco puede quedar desvirtuado el derecho que me asiste para adquirir por prescripción, por la circunstancia de que el Juez de los autos haya sustentado la tesis de que Manzuetto del Giorgio fué poseedor del terreno de que se trata y de que me considere como causahabiente de éste. Yo me concreté a sostener la validez de mis derechos posesorios; comprobé con las declaraciones de varios testigos idóneos y de reconocida honorabilidad, la verdad de los hechos expresados en mi demanda y eso es bastante para haber obtenido sentencia favorable. Si el Juez de los autos descubrió otros aspectos de la cuestión a debate y quiso abordarlos al fallar, es cosa que no debe, ni puede perjudicarme, ni pudo eso servir de fundamento a la Sala para desconocer mis derechos, porque entonses es ella, la que elucubrando sobre una cuestión distante a la planteada por mí, trata de desconocer los hechos esenciales a que me referí en mi demanda y que sirvieron de base a la acción de prescripción que ejercité con apoyo en los preceptos legales invocados en mi propia demanda.-En cambio nada dice la Sala en su resolución de lo declarado por los testigos Hugo Garnier, Juan Luna, Blas Burquez, Carlos Burquez, Melchor Camilleri y Juan Businaro, todos los cuales declararon uniformes y contestes sobre los hechos referidos en mi repetida demanda.- Por eso al desestimar la Sala esta prueba, viola en mi perjuicio los artículos 419 y 424 del Código de Procedimientos Civiles.-

CUARTO:-En el mismo punto a que me estoy refiriendo, la Sala estima que la sentencia de primera instancia violó los artículos 1281, 1282 y 1635 del Código Civil que se refieren a la transmisión de derechos sucesorios, afirmando que los derechos de posesión se transmiten por herencia. Considero que la Sala incurre en un error, pues ni yo me he ostentado como heredera de Manzuetto del Giorgio, ni es el caso de transmisión de derechos por herencia.-Se trata de la aplicación del artículo 1149 del Código Civil, que dice: "QUE EL QUE PRESCRIBE PUEDE COMPLETAR EL TERMINO NECESARIO PARA SU PRESCRIPCION, REUNIENDO

AL TIEMPO QUE HAYA POSSEIDO, EL QUE POSSEYO LA PERSONA QUE EN
TRANSMITIO LA GOEA" Este es el principio legal que el Juez
de los autos estimó pertinente aplicar en el caso, sin per
juicio, naturalmente, de lo dicho y probado por mí.-

QUINTO:-En el mismo punto a que hago alusión, la Sala dá
por hecho, aunque no hay prueba alguna sobre el particular,
que Manzuetto del Giorgio era extranjero, y bajo ese supues
to afirma que éste no podía poseer un bien inmueble en la zo
na prohibida para los extranjeros por la fracción I del art.
27 Constitucional. Pero es el caso que el citado precepto no
se refiere A LA POSESION sino a la PROPIEDAD de bienes rai
ces. Además la Sala dá por cierto que los terrenos en cues
tión se encuentran en la zona prohibida para los extranjeros
sin que tampoco exista prueba de ello en autos. Como la Sala
se funda en esas consideraciones para revocar la sentencia
del inferior, viola en mi perjuicio la garantía individual
consagrada en el art. 14 Constitucional, pues no se apega a
la letra, ni a la interpretación jurídica de la Ley.-

SEXTO:-Al analizar la Sala los conceptos de violación
expresados por el Sr. Bonardi, sostiene que debe existir con
gruencia entre la acción, la excepción y la sentencia, agre
gando que el actor debe probar los hechos en que funda su ac
ción y el demandado aquellos en que funda su excepción.-En
el caso de que se trata quedaron por mi parte satisfechos es
os requisitos, puesto que yo ejercité la acción de prescrip
ción; presenté pruebas para acreditar los fundamentos de a
quella y el Juez de los autos consideró buenas mis pruebas y
no así las del demandado, ya que sus testigos no declararon
uniformente. Por lo tanto, la sentencia es congruente con
la demanda y apegada a la Ley. No hay entonces motivo para
que la Sala se acoja a la circunstancia de que el Juez a quo
mandó se practicara una diligencia de prueba para mejor pro
veer, para considerar por ello, violados los preceptos lega
les que menciona la autoridad responsable.-

SEPTIMO:-Como la Sala insiste en sostener que Manzuetto
del Giorgio no podía poseer inmuebles en la zona prohibida pa
ra los extranjeros por la fracción I del art. 27 Constitucio
nal y dá por probado que éste era extranjero, fundándose pa
ra ello en la existencia de una carta escrita en idioma ita-

liano y dirigida por Luis Bonardi a del Giorgio, cabe preguntar porqué, entonces, no hizo la misma consideración respecto al propio Bonardi que es el autor de esa carta; quién también lleva apellido italiano y que no ha probado en autos ser mexicano?

Aunque yo no he pretendido ser causahabiente de del Giorgio, ya que el Juez de los autos así lo considera y tuvo por buena la posesión de éste, es preciso sostener que la fracción I del art. 27 Constitucional sólo prohíbe a los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas; pero, repito, que el precepto Constitucional invocado, no prohíbe a los extranjeros que ejerzan la posesión de tierras y aguas en la zona indicada. Como la Sala dió a éste precepto una interpretación antijurídica y en ello se funda para revocar la sentencia que me favorece, viola en mi perjuicio el art. 14 Constitucional.-

OCTAVO:-La autoridad responsable dá por probado el hecho de que Manzuetto del Giorgio era aparcerero de Bonardi, y al hacerlo, dejó de observar las reglas relativas a la estimación de las pruebas, ya que los contratos de aparcería deben constar precisamente por escrito y como el demandado no exhibió el contrato de aparcería que dijo había existido entre él y Manzuetto del Giorgio, no debió la Sala tener por probado ese hecho, tanto más cuanto que ^{de} los testigos que sobre el particular depusieron, nadie pudo proporcionar datos precisos sobre la existencia real de ese contrato.-

NOVENO:-En los considerandos III y IV de la sentencia de que me quejo, la Sala responsable, haciendo suyos los argumentos de la parte apelante, sostiene que la posesión que ejerzo sobre los terrenos de que se trata es de mala fé y que por lo tanto el término para la prescripción debe ser de diez años. Suponiendo, sin conceder, que mi posesión sea de mala fé, los diez años requeridos por la Ley para prescribir, transcurrieron con exceso desde el año de 1930 en que comenzó mi posesión hasta el de 1945 en que se inició el juicio.- Como la Sala no tuvo en cuenta las pruebas rendidas por mí para probar ese hecho, dejó de observar los preceptos legales relativos al valor de la prueba y por lo tanto violó en mi perjuicio

deró probados los derechos de propiedad de los terrenos en cuestión en favor del demandado Luis Bonardi, con la sola presentación de una copia certificada del Registro Público de la Propiedad relativa a la inscripción de esos terrenos a nombre de Bonardi; pero como la propiedad debe comprobarse con la cadena de títulos que demuestren el enlace perfecto de las enagenaciones hasta llegar a la escritura última, considero que los derechos de propiedad de Bonardi no están bien probados.

DECIMO:-Consecuente la Sala con el criterio que sustenta, me condena a entregar a Bonardi "la finca expresada, con todas sus construcciones, edificios, muebles y semovientes, útiles y objetos de labranza, frutos naturales, civiles e industriales, mejoras y accesiones, etc. etc."

Al resolver la Sala en ese sentido, ni siquiera tuvo en cuenta lo dispuesto por el art. 813 del Código Civil.

DECIMO-PRIMERO:-La autoridad responsable no concedió ningún valor a mis pruebas, ni tomó en cuenta los alegatos formulados por mí en la primera instancia; pero en cambio concedió un valor absoluto a las declaraciones de los testigos presentados por mi contrario, no obstante que entre ellos no hubo dos que declararan en el mismo sentido, aparte de que sus declaraciones versaron sobre hechos sin relación directa con la cuestión debatida, y algunas afirmaciones de los testigos resultan inverosímiles, como por ejemplo esa que la misma Sala menciona y que se refiere a las vides que Bonardi asegura sembró en los terrenos de que se trata, pues se afirmó que dichas vides estaban plantadas a tres pies de distancia una de otra, lo cual hace evidente la falsedad de los testigos que tal cosa afirmaron, porque las vides jamás se plantan a esa distancia, sino a una mucho mayor.-

DECIMO-SEGUNDO:-En el Considerando V de la sentencia de que me quejo, la Sala insiste en sostener que soy poseedora de mala fé, por haber ocupado sin título alguno el terreno en disputa y porque al promover juicio en contra de Bonardi, dije que ignoraba su domicilio.-

Ambas consideraciones carecen de razón: la primera por que para que la posesión sea de buena fé, no se necesita precisamente tan ~~mucho~~ basta con que se entre

a la posesión a título de propietario, en forma pacífica y con ánimo de hacerme dueño de la cosa. Por lo que toca a que yo sabía cual era el domicilio de Bonardi, es una suposición gratuita de la Sala, que ni el mismo demandado denunció al contestar la demanda, porque en efecto hacía muchos años que el citado Bonardi no se aparecía por esta población, y cuando yo promoví el juicio en su contra, aún no residía en esta propia ciudad. Fue por ello que contestó a través de un apoderado. Además, éste, en su escrito de contestación a la demanda, dice textualmente "QUE HASTA ENTONCES PUDO VENIR". Es decir, hasta que supo del juicio vino a esta ciudad.

Por otra parte el procedimiento adoptado por mí es perfectamente legal, por lo que al considerarlo la Sala de mala fé, usa de un criterio contrario al texto expreso de la Ley.

DECIMO-TERCERO:—En el inciso c) del Considerando V de la sentencia, la Sala, sin fundamento alguno califica de falsos a los testigos Hugo Garnieri, Melchor Camilleri, Juan Businaro, Blas Burquez, Juan Luna, David Goldbaum Banuett y Carlos Burquez que yo presenté y muchos de los cuales, precisamente por ser paisanos de Bonardi y de Manzuetto del Giorio, conocían perfectamente la verdadera historia del terreno que poseo y en el cual trabajé conmigo el último, así como las razones por las cuales Bonardi jamás se presentó antes de 1945 con pretensiones de apoderarse de ese terreno que yo había estado, como lo estoy hasta la fecha, poseyendo a nombre propio y siendo reconocida como dueña por todos los habitantes de la región.—

DECIMO-QUARTO:—Por último, considera la Sala como elemento demostrativo de la mala fé que me atribuye, el hecho de que yo haya promovido una información ad-perpetuum para acreditar la posesión que he ejercido sobre los terrenos de que se trata. Sobre el particular debo decir que si hice eso, fue porque así me lo sugirió un abogado, y creo que estuvo bien hecho, pues de lo contrario el Juzgado no habría dado curso a mi promoción.—Entonces, si esa información ad-perpetuum estuvo apégada a la Ley y si no existe sentencia alguna que la haya declarado nula o fraudulenta, no puede la Sala considerarla como tal, y al hacerlo, deja de apégarse a la Ley y viola

en mi perjuicio las garantías individuales de que ya hice mérito.-

DECIMO-QUINTO: -Al revocar la Sala del Tribunal Superior de Justicia en este Territorio, la sentencia pronunciada por el C. Juez de Primera Instancia de este Partido en el juicio ordinario civil seguido por mí en contra de Luis Bernardi y al condenarme en los términos que se expresan en la sentencia dictada por dicha Sala con fecha 24 de Octubre del presente año, me causa molestias en mi posesiones, en que esté fundada y motivada legalmente la causa del procedimiento; por lo tanto, viola en mi perjuicio las garantías individuales consagradas por el art. 16 Constitucional, en su parte relativa y me obliga por ello a impetrar la protección de la Justicia Federal.

Por todo lo expuesto y con fundamento en los artículos 158, 161, 166, 167, 170, 173, 176, 179, 183, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo,

PIDO y SUPlico a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sirva:

1o.-Tenerme por presentada en tiempo y forma, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, con jurisdicción en el Territorio Norte de la Baja California, consistentes en la sentencia a que hago mérito en este escrito; y

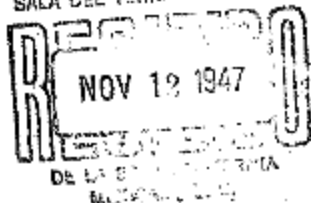
2o.-Previa la substanciación del juicio correspondiente, dictar su respetable fallo declarando que la Justicia de la Unión me ampara y protege contra la sentencia de que me quejo.

Protesto lo necesario.-

ENSENADA, Baja Calif., a 10 de noviembre de 1947.

Maria Luisa González
Maria Luisa González.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DEL TERRITORIO NORTE





SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. C. F. A.

12/

-- EL CIUDADANO LICENCIADO RODOLFO SOSA Y SILVA SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL TERRITORIO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA, C E R T I F I C A: QUE EN EL TOCA NUMERO 9/47 - RELATIVO A LA APELACION INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA QUE DICTO EL C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL QUE MARIA LUISA GONZALEZ SIGUE CONTRA LUIS BONARDI.- OBRA UNA EJECUTORIA DEL TENOR SIGUIENTE:-- -- -- --
-- "Mexicali, Baja California a 24 veinticuatro de octubre de 1947 mil novecientos cuarenta y siete. -- -- -- --
Vista en grado de apelación la sentencia definitiva de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, pronunciada por el C. Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, en el juicio ordinario civil promovido por la señora MARIA LUISA GONZALEZ, contra el señor Luis Bonardi, para que se declarase en su favor la propiedad por prescripción de las manzanas de terrenos números ciento veintiocho y ciento cuarenta y seis de la Colonia "Coronita", de aquella Delegación, y; -- -- -- --

R E S U L T A N D O:

1/o.- La sentencia de que se trata concluye con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- La actora en este juicio probó su acción y el demandado no probó ni sus defensas ni su reconvención.- SEGUNDO.- Se declara propietaria por prescripción a la señora María Luisa Gonzalez, de las manzanas números ciento veintiocho y ciento cuarenta y seis de los terrenos adyacentes a la Colonia Coronita, de esta jurisdicción, cuyas dimensiones y colindancias son las especificadas en el duplicado de un contrato de compraventa existente en el Registro Público de la Propiedad de este lugar, registrado el veintiocho de enero de mil novecientos treinta y cinco y celebrado entre los señores Newt House y Luis Bonardi.- TERCERO.- No ha lugar a condenación en costas.- CUA RTO.- Notifíquese y en su oportunidad inscribase copia certificada de esta sentencia en el Registro Público de la Propiedad de este lugar, para que sir-

va de título legítimo de propiedad a la señora María Luisa González." - - - - -

2/o.- Inconforme con dicha sentencia el demandado Bonardi, interpuso el recurso de apelación el que previa calificación del grado y tramitación por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios a quien correspondió en principio el conocimiento de este recurso, ordenó por auto de veinticinco de junio último la remisión del Toca y de los autos originales correspondientes a esta Sala, para que se avoque el conocimiento del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales; por lo que este Tribunal, por auto de 31 treinta y uno de julio del presente año en que se recibieron los autos, decretó su radicación y demás trámites subsiguientes. En el toca relativo a este asunto aparece que el apoderado del apelante, por su escrito de fecha veinticuatro de marzo último y dentro del término legal expresó agravios del que se corrió traslado a la contraria sin que ésta hubiera contestado y siendo el estado de los autos el de dictar sentencia, se procede al estudio de los agravios expresados y dictado del fallo correspondiente en los siguientes términos. - - - - -

C O N S I D E R A N D O:

I.- Alega en primer lugar el apelante que: el Juez a que introdujo al debate un hecho nuevo no alegado por la actora en su demanda y decretó la práctica de diligencia para mejor proveer para acreditar ese hecho que toma como fundamento el mismo Juez para apoyar su sentencia y declarar procedente la acción intentada, con violación de los artículos 81, 268, 272, 279, 281, 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles; y de los lo., 1135, 1139, 1149, 1151, 1152, 1156 y 1157 del Código Civil. El hecho nuevo a que se refiere el agravio se hace consistir en que: la actora María Luisa Gonzalez, no fué una simple sirvienta de Mansuetto del Giorgio, a quien el propio Juez reconoce el carácter de poseedor de los predios en cuestión desde principios del año de mil novecientos treinta y ocho hasta la fecha de su muerte, diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, sino que además fué concubina del citado del Giorgio.- Y las pruebas que sobre tal hecho cons-



SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. C. F. A.

tituyó oficiosamente el Juez de referencia fueron: la posición articulada por el mismo funcionario en la audiencia de confesión de la actora por la que ésta confesó que "era amante de Mansuetto del Giorgio"; y en el examen de los testigos Dr. Pedro Loyola Luck y Luis Grandi habiendo declarado que María Luisa González y del Giorgio habían sido amantes, dando como razón de su creencia el primero de los nombrados la de haber oído que del Giorgio llamaba a la González, "mi vieja"; y el segundo, por haber visto a la citada González vestida de luto después de la muerte de del Giorgio.- El agravio alegado es cierto y la Sala lo estima procedente, pues en efecto aparece en los autos del juicio en que se dictó la sentencia apelada que la parte actora, María Luisa González, no alegó ni invocó en los hechos generadores de la acción ejercitada por medio de su demanda inicial, el de que hubiera sido concubina de Mansuetto del Giorgio y mucho menos que éste hubiera estado poseyendo los terrenos en cuestión y ^{que} por tal motivo, al término de la posesión del Giorgio debiera sumarse, el término de la posesión de la actora, contando al partir de la muerte del referido Mansuetto, cubriendo así la suma de dichos términos el tiempo necesario para que se operara la prescripción adquisitiva de referencia. El Juez de los autos introdujo al debate éstos elementos sin que hayan sido planteados por las partes y constituyó la prueba confesional y testimonial mencionadas oficiosamente con que se tienen por probados tales elementos y éstos se toman en cuenta en la sentencia apelada para declarar procedente la prescripción a que se alude, todo con violación de los preceptos legales invocados al principio de éste resultando.

II.- El segundo agravio alegado lo integran tres conceptos de violación: a) que el Juez a quo modificó substancialmente los hechos alegados por la actora con violación del artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales, toda vez que en la sentencia apelada aparece la actora acreditando hechos diversos de los que invocó en la demanda; ocurriéndose para ello al expediente del concubinato entre la actora González y del Giorgio, hecho no invocado en la demanda, y del que se concluye -

que del Giorgio aparcero del demandado Bonardi, hasta el año de mil -
novecientos treinta y ocho en que dejó de serlo comenzó a poseer di-
chos terrenos como propietario a partir desde ese mismo año hasta el
diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno en que ocurrió su -
fallecimiento, y de ésta fecha al cinco de julio de mil novecien -
tos cuarenta y cinco, fecha de la presentación de la demanda por la
actora, poseyó ésta última; por lo que considerando a la González co-
mo causahabiente de del Giorgio, suma los dos periodos posesorios que
hace ascender a más de siete años que se estiman suficientes para la -
prescripción; con lo cual se violan además los artículos 1139 y 1149 -
del Código Civil del Distrito y Territorios Federales; b) Que la pose-
sión es un hecho generador de derechos, los que en caso de muerte se -
transmiten por sucesión y que como en la especie no consta que los su-
puestos derechos posesorios de del Giorgio hubieran pasado por este me-
dio a su concubina María Luisa González, según lo dispuesto en los ar-
tículos 1281, 1282 y 1635 fracción VI del Código Civil invocado, el -
Juez del conocimiento violó tales preceptos al atribuir en su senten-
cia los expresados supuestos derechos posesorios de del Giorgio a la -
actora González; c) Que Mansuetto del Giorgio, según lo hace suponer
su mismo nombre, era extranjero, y como tal estaba incapacitado pa-
ra adquirir inmuebles dentro de la zona de cien kilómetros de la fronte-
ra con los Estados Unidos de Norte América, de conformidad con lo pre-
venido en la fracción I del artículo 27 de la Constitución General; por
lo que la actora, si hubiera alegado los derechos posesorios de del Gi-
orgio, debería haber acreditado que éste era mexicano por nacimiento o
por naturalización: circunstancia que pasó por alto el Juez a quo, por -
lo que debe revocarse su sentencia. Analizando los anteriores concep-
tos de violación la Sala estima que el primero de ellos, el marcado -
con la letra a), es sensiblemente el mismo que el alegado en primer lu-
gar por el recurrente, el cual como queda expuesto en el considerando -
anterior se estimó procedente, por ser un principio de explorado dere-
cho el de la congruencia que debe existir entre la acción, excepción y -
sentencia, del cual lógicamente se deduce que el actor debe probar los -
hechos en que funda su acción y el demandado los que sirven de apoyo a
su excepción, siendo la sentencia el corolario de lo alegado y probado
en autos. Más como en el caso que nos ocupa el Juez del conocimiento in-



SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. C. F. A.

introdujo al debate hechos nuevos no invocados en la demanda y que se precisan en el concepto que se estudia, resulta evidente la violación a los preceptos legales invocados. Igualmente se considera eficaz el concepto de violación alegado y que se marco con la letra b) en esta Ejecutoria, pues en efecto, el Juez de los autos, partiendo de la hipótesis de que Mansuetto del Giorgio fué poseedor de los terrenos en cuestión con las características legales para prescribir, por el período de tiempo comprendido entre el primero de enero de mil novecientos treinta y ocho al diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno en que ocurrió su fallecimiento y de que la actora María Luisa González había sido su concubina, agrega el lapso de tiempo que supone poseído por del Giorgio al que dice haber poseído la actora, a lo que es igual atribuye los derechos derivados de la posesión de del Giorgio a los que reconoce tener como poseedora la señora Gonzalez, sin que tal traslación de derechos se haya constatado por medio de la resolución correspondiente dictada en juicio sucesorio en que así se hubiere determinado, como lo previenen los preceptos legales que informan el concepto de violación que se analiza. En cuanto al tercer concepto de violación que se deja marcado con la letra c), cabe decir que también es exacto, y por lo tanto procedente, ya que el Distrito de Ensenada dentro del cual quedan comprendidos los lotes de terreno de referencia está a menor distancia de cien kilómetros de la línea divisoria que separa el territorio nacional del de los Estados Unidos del Norte y constando por otra parte, presuncionalmente, por el nombre del extinto Mansuetto del Giorgio y por una carta escrita en idioma italiano dirigida por Luis Bonardi a del Giorgio, presentada por la actora como parte de sus pruebas, que el nombrado Mansuetto no era mexicano, es evidente que éste tenía incapacidad absoluta para haber adquirido la posesión o propiedad de dichos terrenos. Como el Juez a quo, hizo punto omiso de esta consideración y atribuyó a del Giorgio derechos posesorios contra la terminante prohibición del texto constitucional citado en este concepto de agravio, resulta obvia la violación cometida. - - -

III.- Como tercer agravio la apelante alega: Que aún suponiendo cier-

ta la posesión de Mansuetto por P eríodo de tiempo que le asigna el -
Juez de los autos, de primero de enero de mil novecientos treinta y -
ocho al diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno; que éste hu-
biera podido transmitir esos derechos a su concubina González y que és-
ta haya poseído desde la fecha en que terminó la posesión de/^{su}su-puesto
causante hasta el cinco de julio de mil novecientos cuarenta y cinco,
fecha en que la actora demandó la prescripción adquisitiva, como lo a-
cepta el mencionado Juez, tales períodos de posesión serían de mala fé
ya que ninguno de los presuntos poseedores no han tenido título como
fundamento de esa posesión y por consiguiente el término para que se -
operara la prescripción adquisitiva hubiera sido el de diez años, cir-
cunstancia que no tomó en cuenta el citado Juez y por ello violó los -
artículos 823, 824, 825, 826, 1151 y los 806 807 y 1152 fracciones I,
II y III del Código Civil invocado. El mismo apelante cita como prueba
de la mala fé de la actora el hecho de que ésta, pocos meses después
de la muerte de su amante Mansuetto y a espaldas del demandado Bonardi,
rindió una información ad-perpetuum ante el mismo Juez de los autos -
para acreditar que venía poseyendo los expresados terrenos desde el -
año de mil novecientos treinta con animo de hacerse dueña, información
que contra lo dispuesto en los artículos 3009 y 3023 del Código Civil
del Distrito Federal y Territorios Federales fué recibida y registra-
da por el mismo Juez de que se trata así como que la misma actora pro-
movió el juicio de referencia manifestando falsamente que ignoraba que
el demandado Bonardi residiera en Ensenada y pidiendo en consecu-encia
que se le emplazara por medio de edictos. Este agravio, también se es-
tima procedente en lo que mira ^ala posesión atribuida a la actora por
su propio derecho por el Juez a quo, por el período comprendido entre
el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno al cinco de julio
de mil novecientos cuarenta y cinco, toda vez que de autos consta -
que la expresada actora no tenía ningún título para poseer los terre-
nos aludidos y en consecuencia su posesión ha sido de mala fé en los
términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 806 del
Código Civil invocado y debió regirse en cuanto al término para pres-
cribir, a lo dispuesto en la fracción III del artículo 1152 del mismo



SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. C. F. A.

ordenamiento, o sean diez años para adquirir por prescripción un inmueble. Como el Juez de los autos omitió esta consideración en su sentencia y apreció de diverso modo la posesión de la actora, violó con ello los preceptos citados en este agravio. Este mismo agravio es inconducente en lo que respecta a lo arguido con relación a la posesión atribuida a Mansuetto del Giorgio, ya que como queda establecido al discutir el tercer concepto de violación del agravio segundo en el considerando inmediato anterior, el citado del Giorgio, en su carácter de extranjero, estuvo absolutamente incapacitado para haber adquirido ninguna clase de derechos posesorios en los términos de la fracción I del artículo 27 constitucional, y por lo tanto, la detentación de esos terrenos por parte del nombrado Mansuetto, no es susceptible de calificación de mala o buena fé, quedando tal situación reducida a una mera situación de hecho no reconocida por el derecho para los efectos de la prescripción adquisitiva. De la misma manera se estima inconducente lo alegado por el apelante respecto a la recepción e inscripción en el Registro Público de la información ad-perpetuam ante el Juez a quo, pues aunque en estricto derecho son ciertas las irregularidades de que adolece la referida información consistentes en que ésta se recibió con relación a un inmueble que estaba inscrito con anterioridad en el Registro y que luego se registró dicha información a nombre de la actora en el propio Registro Público de la Propiedad de Ensenada a cargo del expresado Juez, conflagrante violación de los textos legales que cita en esta parte del agravio el apelante, eso no obstante, como el Juez sentenciador no tomó en cuenta este documento de información al resolver en la sentencia apelada, procede estimar que tales irregularidades no causan perjuicio ni agravio al recurrente. - - - - -

IV.- El cuarto agravio se hace consistir en que: al no haber comprobado la actora su acción de prescripción para que se le declarara propietaria de los lotes de terreno de que se trata, debió haberla condenado el Juez a la restitución de dicho terreno con sus frutos y accésiones, ya que el mismo Juez admite en su sentencia que no hay ninguna duda de que el demandado Bonardi, haya sido el propietario del predio en cuestión desde el veintiocho de enero de mil novecientos -

treinta y cinco como lo acredita el duplicado del contrato de compra-venta celebrado entre el nombrado Bonardi y el señor Newt House e inscrito en el Registro Público en la misma fecha citada; que en uso de su derecho de propiedad Bonardi dió en aparecería el terreno en cuestión, contrato que tiene por acreditado el Juez apelado, aunque luego por una serie de suposiciones gratuitas el propio Juez concluye que tal contrato de aparecería terminó a partir de mil novecientos treinta y ocho en que Mansuetto comenzó a poseer en nombre propio hasta el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno en que falleció y que luego continuó poseyendo a nombre propio también la señora González; que la suposición de que Mansuetto poseyó a nombre propio no está basada en ninguna prueba ni fué alegada por la actora, por lo que debe estimarse que el nombrado Mansuetto fué aparcero de Bonardi hasta el fallecimiento del primero y que la actora González comenzó a poseer desde la muerte de su amante sin título legal aprovechándose de los productos de la citada finca y causando perjuicios con su desatinado proceder, como la destrucción de los viñedos, etc., por lo que está obligada la misma González a restituir dicho inmueble al reconviniente que es su legítimo propietario, con sus frutos y acciones y a pagar los daños y perjuicios originados por causa extracontractual, en los términos de los artículos 830, 886, 887, 896, 1915, 2104, 2107, 2108, 2109, 2110 y 2118 del Código Civil del Distrito y Territorios Federales que por falta de aplicación violó el Juez a quo. Que como consta en autos el demandado reconvino a la actora la reivindicación de los citados predios y la entrega de los objetos y animales que se encuentran en esos terrenos, exigiendo el pago de los frutos producidos por esa finca desde el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno en que entró en posesión hasta la fecha en que haga restitución, así como el pago del menoscabo sufrido por la cosa y que como mínimo asciende a ocho mil pesos, más las costas y gastos del juicio. Que para acreditar la reconvención rindió todas las pruebas que enumera y constan en el cuaderno de pruebas respectivo. Entrando al estudio del agravio, acabado de mencionar se encuentra que este es del todo procedente,



SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. C. F. A.

pues como queda demostrado al hacer el análisis y consideración de los procedentes agravios, los cuales se estimaron arreglados a derecho en la forma antes expuesta, la parte actora no probó su acción de prescripción y en cambio, el demandado sí probó su reconvencción, toda vez que con la copia certificada del Registro Público de la Propiedad relativa al duplicado del contrato de compra-venta de las manzanas 128 y 146 de los terrenos adyacentes a la Colonia "Coronita", celebrado entre el señor Newt House como vendedor y el demandado Luis Bonardi como comprador el veintiocho de enero de mil novecientos treinta y cinco, documento que en copia certificada obra en el cuaderno de pruebas del demandado y apelante y que también acompañó en igual forma a su demanda la actora, quedó plenamente comprobado el derecho de propiedad sobre dichos lotes de terreno en favor del demandado Bonardi y a la reivindicación de los mismos con sus frutos y accesiones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 411 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y Territorios Federales que el Juez de los autos violó al desconocer estos derechos del apelante. Igualmente quedó acreditado en autos, que la actora ha estado en posesión del inmueble de referencia desde el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, fecha en que falleció el aparcero Mansuetto del Giorgio quien con tal carácter había venido ocupando la misma finca, sin haber tenido en su favor la actora González ninguna causa jurídica para haber entrado en esa posesión y por consiguiente tal posesión ha sido de mala fé por la carencia del justo título, lo que está demostrado con: las actuaciones de éste juicio; la confesión de la actora quien conviene en haber ocupado esos terrenos con motivo de haber sido llamada por Mansuetto con el cual sostuvo relaciones maritales, de conformidad con lo establecido en los artículos 402, 406 y 413 del Código Procesal antes invocado, en relación con el 806 del Código Civil también expresado, que se citan como fundamento de éste agravio y que el Juez a quo violó al desestimar los derechos del demandado. El mismo demandado probó en el juicio que en la finca ocupada por la actora González, existían plantaciones de vides en una extensión de una hec-

tarea con intervalos de tres pies entre cada planta; calculadas como en número de 800 ochocientas plantas; veinticinco árboles frutales de diferentes clases como manzanos, perales, ciruelos, etc., tres casas de madera, dos gallineros, dos pozos de agua dulce; ganado vacuno, equino y mular, aves de corral, útiles de labranza, una batería de cocina, una estufa, un carro de cuatro ruedas para tiro de caballos, tres camas, un motor de gasolina y otros objetos y que tales plantaciones, muebles y semovientes y construcciones eran de su propiedad por haber sido expensados con dinero de su peculio, así como los cercos de alambre puestos en dicho predio; lo cual consta por el dicho de los testigos Ricardo Hudssong, Agustín Lafarga, Primo Paganini, María Luisa de Foradori, Chris Albersten y Julio Dum Legaspy, que en concepto de la Sala hacen prueba plena en los términos del artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios. Del mismo modo se demostró por el demandado, con el dicho de los testigos Chris Albersten y Joaquin Sanchez, que de las expresada finca han desaparecido por haber sido arrancadas las plantas de vid de que se ha hecho mérito, dos vacas, una yegua y que un pozo de agua fue tapado; tales faltantes se estiman como menoscabo sufrido en los bienes del demandado. El precepto legal acabado de invocar fue violado en la sentencia apelada, por haberse desestimado estas constancias y desconocidos los derechos del recurrente que con ellas se acreditan. Por medio de inspección judicial practicada en la finca de que se trata y por el dictamen rendido por el perito Ingeniero Francisco Fernández, por parte del demandado, y por el perito Agustín Penagos Lara, por parte de la actora, nombrado por el Juzgado en rebeldía de esta, demostro el demandado la existencia actual de las plantaciones, construcciones, muebles, semovientes, útiles y aperos de labranza en dicha finca así como el valor que se atribuye a todas estas cosas y que en conjunto asciende a la cantidad de \$ 21,116.00 veintin mil ciento dieciseis pesos cero centavos, inclusive el valor del terreno en cuestion; pruebas que tienen un valor probatorio pleno de acuerdo con lo establecido en los artículos 418 y 419 del Código Procesal invocado y también se estiman violados por el Juez de los autos al haber omitido tales constancias al desconocer los derechos del demandado formulados en su reconven-



SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA E. C. F. A.

ción, y - - - - -

V.- En el quinto agravio el apelante expresa que se violaron en su perjuicio los artículos 1910, 1912 y 2118 del Código Civil invocado en relación con los 139, 140 y 141 del de sus procedimientos en virtud de que el Juez a quo no tubo en cuenta el proceder ilícito de la actora González que le irroga perjuicios de consideración en su patrimonio, y no solo declaró probada la acción ejercitada por dicha González, sino que la absolvió de las costas judiciales que ha tenido que erogar para defender su derecho de propiedad que pretende usurparle la actora. Esta Sala, estima procedente el agravio de que se hace mención, por las siguientes razones: a) Porque, como ha quedado establecido en esta ejecutoria, la actora María Luisa González careció de justo título para poseer la finca que intentó adquirir en propiedad por prescripción y por lo tanto su posesión - fué de mala fé; b) Porque, no obstante que la actora tenía conocimiento de que el dueño de la finca en cuestión, es demandado Luis Bonardi, residía en Ensenada, al formular la demanda que dio origen a éste juicio, pidió que se emplazara a Bonardi por medio de edictos por ignorar por ignorar su domicilio; tales hechos están acreditados en los autos con la demanda de la actora y las respuestas dadas por ésta al absolver las posiciones que le fueron articuladas por el demandado, marcadas con los números 37, 39 y 40. De esta circunstancia se deduce con claridad la mala fé procesal de la actora, quien pretendía por este medio seguir un procedimiento llano de rebeldía contra el demandado y lograr su objetivo sin las dificultades de una controversia judicial; c).- Porque presentó en el juicio a que esta ejecutoria se refiere a los testigos Hugo Garnieri, Melchor Camilleri, Juan Bucinaro, Blas Burguez, Juan Luna, David Golvaun Banuet y Carlos Burguez, para acreditar con las declaraciones de éstos que había estado poseyendo la finca en cuestión desde el año de mil novecientos treinta con ánimo de dueña, testimonios que son sospechosos de falsedad, ya que en autos ha quedado demostrado que la actora solo ha tenido una posesión de mala fé en el predio de que se trata desde el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno; d). Porque la misma actora, pocos meses después de la muerte de su amante Mansuetto,

rindió ante el propio Juez de los autos, una información ad-perpetuam, para acreditar que había venido poseyendo el inmueble aludido desde mil novecientos treinta con ánimo de hacerse dueña, sabiendo que esa propiedad estaba debidamente registrada a nombre del demandado Bonardi, y porque a pesar de ello registró dicha información ad-perpetuam en la misma Oficina del Registro Público de la Propiedad del lugar contra lo dispuesto en los artículos 3009 y 3023 del Código Civil antes mencionado, lo cual está acreditado en el juicio con el testimonio de la escritura relativa a la protocolización de las diligencias de información ad-perpetuam promovidas por dicha actora con el objeto indicado. Todos estos hechos, alegados por el recurrente, se estiman ciertos y procedentes y en consecuencia, también lo son las violaciones a los artículos que se invocan como fundamento de este agravio, por lo cual la actora debe ser condenada al pago de las costas y gastos judiciales en ambas instancias. - - - - -

Por todo lo expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: - - -

PRIMERO:- La actora María Luisa González, no probó su acción. - - -

SEGUNDO:- En consecuencia, se revoca la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, dictada por el C. Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, en el juicio ordinario civil número 121/945 promovido por María Luisa González contra Luis Bonardi. - - - - -

TERCERO:- Por lo tanto, no ha lugar a declarar que han prescrito en favor de la nombrada María Luisa González, las manzanas de terrenos números ciento veintiocho y ciento cuarenta y seis, ubicadas en la Colonia Coronita, de la Jurisdicción de Ensenada, Baja California, cuyos predios tienen las superficies y colindancias que se expresan en el certificado expedido por el Encargado del Registro Público de la Propiedad del mencionado Ensenada, que acompañó a su demanda la actora. - - - - -

CUARTO:- El demandado Luis Bonardi, probó su acción reivindicatoria ejercitada en vía de reconvencción en este juicio. - - - - -

QUINTO:- Se declara que el actor en la reconvencción mencionada -- señor Luis Bonardi, tiene el dominio absoluto sobre los lotes de terreno a que se contrae el punto tercero resolutivo y se condena en consecuencia a la señora María Luisa González de la entrega de



SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. CFA.

la finca expresada, con todas las construcciones, edificios, muebles y semovimientos, utiles y objetos de labranza, frutos naturales, civiles e industriales, mejoras e y accesiones de acuerdo con el inventario formulado por los peritos valuadores y que obra en el cuaderno de pruebas de Bonardi, en favor de éste último. - - -

SEXTO:- Los frutos a que se refiere el punto resolutivo inmediato anterior, serán abonados al señor Luis Bonardi por la señora María Luisa Gonzalez, a partir del diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, hasta la fecha en que haga la misma Gonzalez total entrega del referido inmueble. Igualmente queda a cargo de la misma señora Gonzalez la obligación de rendir cuenta al señor Bonardi, de tales productos por ese periodo de tiempo. - - - - -

SEPTIMO:- Se condena igualmente a la señora María Luisa González al pago de los menoscabos sufridos en el inmueble de que se trata consistente en la pérdida de 800 ochocientas plantas de vid; destrucción de un pozo de agua; y desaparición de dos vacas y una yegua, de conformidad con los valores fijados por los peritos en el dictamen respectivo del cuaderno de pruebas de Bonardi. - - - - -

OCTAVO.- Se condena a la misma señora María Luisa González al pago de las costas y gastos judiciales de ambas instancias, en favor del demandado Bonardi. - - - - -

NOVENO:- Se fija a la actora María Luisa González el término de diez días a partir de la fecha de la notificación de esta ejecutoria, para el cumplimiento de todo lo mandado en esta sentencia. - -

DECIMO:- Notifíquese, cúmplase y con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse los autos originales del juicio a que este Toca corresponde, al Juzgado de su procedencia. - - - - -

Así por unanimidad de votos lo resolvió la H. Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales con residencia en este Territorio Norte de la Baja California, integrada por los CC. Magistrados Licenciados Arturo Monges Sánchez, Agustín Villagómez y Andrés E. Alemany, siendo ponente el último de los nombrados, y firmaron por ante el suscrito Secretario de Acuerdos Licenciado Rodolfo Sosa y Silva que dá fé. Firmados: A. Monges S.- A. E. Alemany.- A. Villagómez.- R. Sosa y Silva.- Rubricas. - - -

7

ES COPIA QUE CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL, DE DONDE SE -
COMPULSA Y SE EXPIDE EN SIETE FOJAS UTILES, PARA ENTREGAR A LA SE-
ÑORA MARIA LUISA GONZALEZ, PARTE ACTORA, YA EXENTA DEL IMPUESTO DEL
TIMBRE POR IR A SURTIR EFECTOS EN AMPARO.-MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A
TRES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUA RENTA Y SIETE.-v- - - - -

El Secretario de Acuerdos.



Rodolfo Sosa y Silva.

SALA DEL TRIBUNAL
NORTE DE BAJA CALIFORNIA



SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. C.F.A.

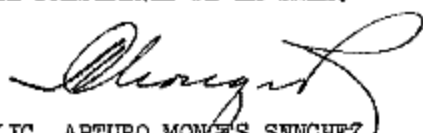
ASUNTO: Se rinde informe justificado.

C. Presidente de la H. Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
México, D.F.

El suscrito en su carácter de Presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, correspondiente al Territorio Norte de la Baja California y rindiendo el informe justificado que ordena el artículo 107 fracción VII de la Constitución Federal en relación con el artículo 169 de la Ley de Amparo vigente, se remite ^a la copia certificada de la ejecutoria que esta H. Sala pronunció con fecha 24 de octubre del corriente año en el toca número 9/47, relativo a la apelación interpuesta por Luis Bonardi contra la sentencia que dictó el C. Juez Mixto de Primera Instancia de Ensenada, Baja California, en el Juicio Ordinario Civil seguido por María Luisa González en contra del apelante, así como al expediente original del juicio de referencia, el cual se envía por vía de constancias señaladas por la quejosa, para concluir que el acto reclamado no viola en perjuicio de la señora María Luisa González garantía constitucional alguna, por lo que procede se le niegue el amparo, ya que se analizaron todas y cada una de las probanzas rendidas por las partes en dicho Juicio y se aplicaron correctamente las disposiciones legales sobre la materia a debate.

Protesto a usted mis respetos.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Mexicali, B.C., a 27 de noviembre de 1947.
EL PRESIDENTE DE LA SALA.


LIC. ARTURO MONTES SANCHEZ.





SECCION SEGUNDA.

EXP. NUM. 8834/47.

México, Distrito Federal, a diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

Con el oficio número ochocientos cincuenta y ocho de la Sala del Territorio Norte de la Baja California, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, recibido con los anexos que acompaña, fórmese y regístrese el expediente relativo al amparo interpuesto por María Luisa González, contra actos de dicha Sala. Acútese recibo. Con fundamento en las fracciones séptima y octava del artículo ciento siete constitucional, se admite la demanda; en consecuencia, de acuerdo con lo prevenido por el artículo ciento setenta y nueve de la Ley de Amparo, pasen los autos al Ministerio Público por diez días para que formule pedimento; y, cumplido que sea ese requisito, túrnense aquéllos a la Tercera Sala. Notifíquese.

Así lo acordó y rubrica el Ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy fé.

8 ENE 1948

El _____ por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados y por oficio a las autoridades responsables según minuta que se sigue.



En 2 ENE 1948

Notificado el C. Procurador General
de la República del auto que antecede, dijo: que designa
para intervenir en este negocio al C. Agente Licenciado
Vargas P. quien estando presente quedó
enterado y firmaron:

P. AC. DEL C. PROCURADOR
EL AGENTE SEGUNDO SUBSTITUTO

[Signature]
[Signature]
[Signature]

En 2 ENE 1948
En _____ pasó este asunto al _____
Ministerio Público para pedimento: Conste.

En 24 ENE 1948 devuelva estos autos el Ministerio
Público, con el pedimento que se agrega.- Conste.

[Signature]

En 28 de mayo de 1948 de acuerdo
con la orden (Lista Núm. 3) queda este expediente
a disposición del Sr. 3 *[Signature]*
para cuenta *[Signature]*



Al G.

Pate. de la Sala del Territ.

SEGUNDA.

Norte de la Baja California.

Mexicali, B. C.

Exp. 8834-47.

11119

Acuse a Ud. recibo de su atento oficio número 858 de fecha 27 de noviembre próximo pasado, - con el que se recibieron los anexos ~~que~~ en el mismo se mencionan, relativos al juicio de amparo directo promovido por María Luisa González ~~contra~~ actos de esa H. - Sala.

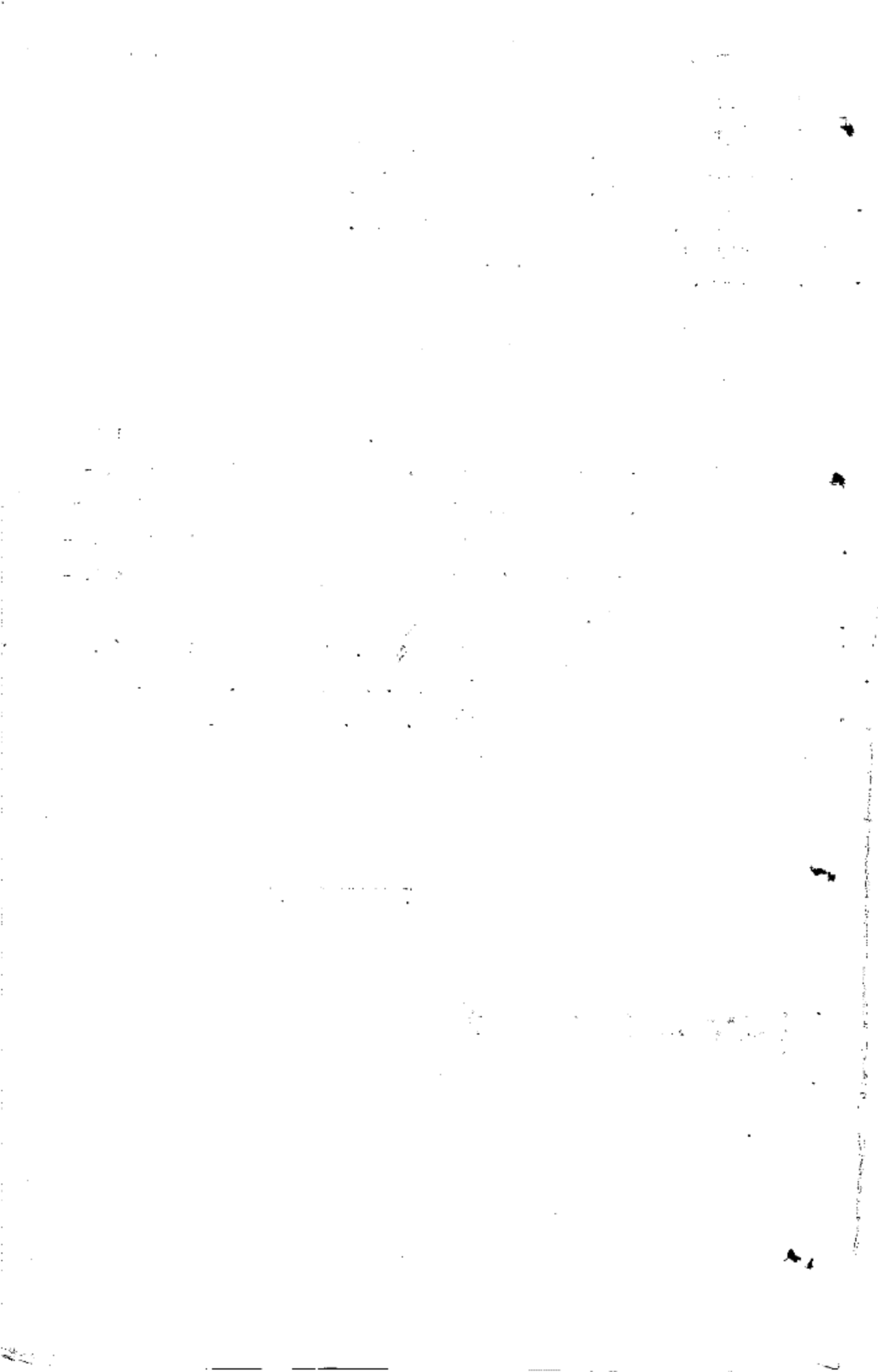
Reitero ~~Ud.~~ mi atenta consideración.

México, D.F. a 10 de dic. de 1947.

ENCERIO. GRAL. DE ACUERDOS.

F. PARADA GAY.

CO.





En el Juicio de amparo promovido por

Ma. Luisa González.

Depto. de Actuarios

Amparo 8834-47

Sección 2a.

Sala 3a.

Número

contra actos de usted

el C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, con
fecha 10 de dic. último.

proveyó en lo conducente lo que sigue:

"Con fundamento en las fracciones VII y VIII
del artículo 107 Constitucional, se admite la demanda;
en consecuencia, de acuerdo con lo prevenido por el
artículo 179 de la Ley de Amparo, pasen los autos al
Ministerio Público por diez días para que formule pedi-
mento, y cumplido que sea ese requisito, tórrense
aquellos a la 3a. Sala".

Lo que notifico a usted como lo previene la
Ley, suplicándole se sirva acusarme recibo.

Protesto a Ud. mi atenta consideración.

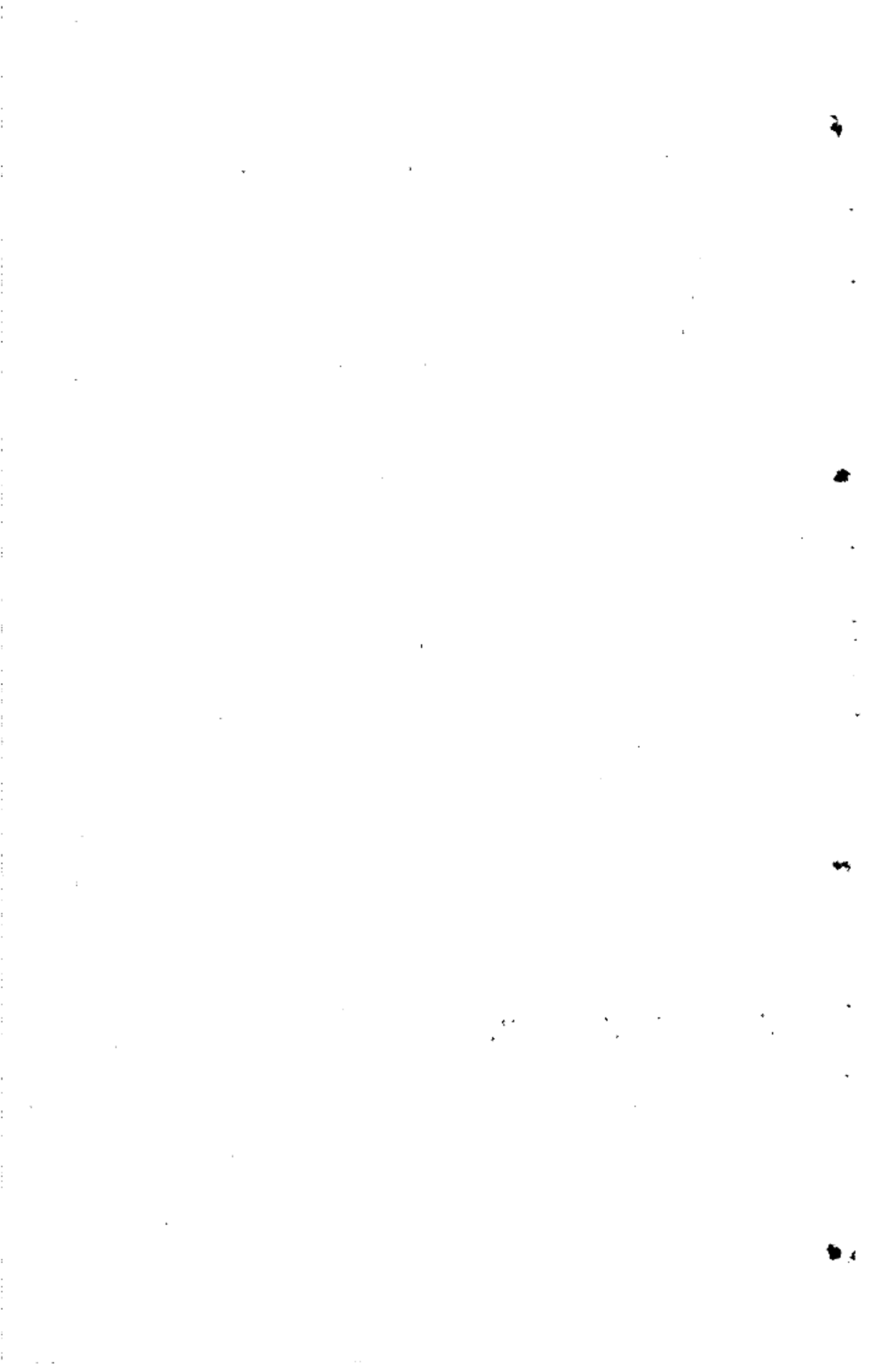
México, D. F., a 8 de Enero de 1948

ACTUARIO.

Al c.

00800

Magdo. del Trib. Sup. de Just.
Terr. Norte de la B. California.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

00646

Exp. Corte No. 8834/47.
No. proc. 18/48.
D I R E C T O.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

por escrito fechado el 10 de noviembre retroproxi-
mo, ocurrió directamente ante ese Alto Tribunal la seño-
ra María Luisa González, por su propio derecho, demandan-
do el amparo de la Justicia Federal contra actos de la -
gala del Tribunal superior de justicia del territorio -
norte de la Baja California, consistentes en la senten-
cia definitiva dictada por dicha gala en el toca relati-
vo a la apelación que interpuso Luis Bonardi contra la -
sentencia que pronunció el juez de primera instancia de
Ensenada, en el juicio ordinario civil promovido por la
quejosa contra el mencionado Bonardi sobre declaración
de propiedad, por prescripción, de las manzanas de te-
rreno 128 y 146 de la colonia "Goronita"; siendo el fa-
llo de apelación, revocatorio de la sentencia de primer
grado, habiéndose declarado que no se probó la acción -
sobre declaración de prescripción, y que, en cambio, sí
se probó la reconvención del demandado sobre reivindica-
ción de los predios dichos, condenándose a la señora --
González a la entrega de éstos con todos sus accesorios,
frutos, etc., condenándose igualmente a la señora gon-
zález al pago de las costas de ambas instancias.

se estiman violadas las garantías que consagran

los artículos 14 y 16 constitucionales porque el juez de primera instancia no procedió indebidamente al decretar una prueba para mejor proveer, ni tampoco fue -- oficiosa la actitud del mismo juez por el hecho de que haya decretado el exámen de unos testigos, pues la circunstancia de que la quejosa haya sido o no amasia de Manzuetto del Giorgio, en nada altera los hechos fundatorios de la demanda; que la misma quejosa se concretó a sostener la validez de sus derechos posesorios, por lo que cualquier otra cuestión tratada, no puede perjudicarla, ya que no se ha ostentado como heredera del Giorgio; que la Sala da por hecho que éste era extranjero y que no podía poseer un bien inmueble en la zona prohibida para los extranjeros por la fracción I del artículo 27 constitucional; pero es el caso que el citado precepto no se refiere a la posesión sino a la propiedad, sin que existan pruebas que funden lo asentado por la sala; que la sentencia del juez estaba apegada a la ley, sin que haya prueba ni de el carácter de extranjero a que se alude ni de una aparcería a que también se hace referencia por la sala; que indebidamente sostiene ésta que la posesión de la quejosa es de mala fé, pues no tiene en cuenta las pruebas rendidas; y en cambio se consideran -- probados los derechos de propiedad del demandado Luis -- Bonardi con una simple copia certificada, que no es título, y en cuanto a los accesorios a que se condena, no se tuvo en cuenta la disposición legal relativa, ni las prue



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

bas aportadas y para que la posesión sea de buena fé, - no se necesita precisamente tener título escrito; que - se hace mala calificación de la prueba de testigos y de la información ad~~perpetuam~~ exhibida, violándose con todo ello los preceptos que se invocan en la demanda de garantías.

Ahora bien, en concepto del suscrito Agente Auxiliar designado para intervenir en el asunto, los motivos de violación que se alegan no tienen ningún fundamento, en lo que respecta a lo resuelto por la Sala responsa---ble en relación con la acción ejercitada por la quejosa, ya que estuvo bien desestimada esa misma acción sobre -- declaración de prescripción, porque al plantearse la demanda, la señora González manifestó haber poseído los terrenos de que se trata, con ánimo de dueña, por el tiempo señalado en la ley para la prescripción adquisitiva; y - en esa virtud no ha sido debido que el juez inferior hubiese agregado a la posesión de la actora, la de su causante, pues tal cosa implica tomar en consideración hechos nuevos que no fueron materia de la acción. Además, admitiendo la validez de las diligencias decretadas para mejor proveer, los derechos posesorios de del giorgio, - no se pueden tener como legalmente trasferidos a la actora, para que pudieran beneficiarle en el cómputo del término ya que se necesitaría que existiera una transmisión legítima, ni la quejosa en su demanda adujo tal hecho - como base de su demanda para que pudiera tomarse ahora -

en cuenta, y es ~~mas~~ todavía, existen presunciones de que el anterior poseedor, causante de la quejosa, era extranjero, por lo que la posesión de éste sobre un predio respecto del cual existe prohibición de adquirir, - cuando menos sin el permiso respectivo, no puede ser legal, porque el ánimo de tal poseedor no puede ser legítimo, y sabido es que la posesión apta para ~~pres~~cribir debe ser con ánimo de dominio. pero en todo caso, ya queda dicho que la acción no se basó para nada en la posesión de un causante, y en esa virtud no se operó la prescripción ni ha existido el justo título necesario - porque no hay la causa generadora de la posesión que alega la quejosa, ni puede hacer veces de tal una simple información ad-perpetuam ni la prueba de testigos. Asi -- pues, por ese capítulo no cabe conceder el amparo.

Ahora en lo que ve a los motivos de violación que se aducen por la procedencia de la contrademanda con sus accesorios, el amparo sí debe concederse ya que esa H. - Corte ha sostenido que cuando se ejercita la acción reivindicatoria, es indispensable probar el dominio, y no basta presentar certificado del registro público, como en el caso, porque ese certificado no constituye el título, que lo es la escritura respectiva. (Amparo 12457/32. inf. de 1936). tampoco constituyen título la información de testigos y demás elementos presentados por el contrademandante; por lo que si la acción de dominio convencional no está bien probada, no puede estarlo tampoco ninguna de las accesorias sobre perjuicios, frutos -



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA


etc., existiendo pues, por éste solo capítulo las violaciones alegadas.

por lo expuesto, pido a esa H. Corte se sirva conceder el amparo solamente por los motivos dichos.

A t e n t a m e n t e .

México, D.F. a 20 de enero de 1948.

EL AGENTE AUXILIAR.


Lic. Rafael Vargas Procel.

cgo.



México, Distrito Federal, a treinta de marzo de mil novecien-
tos cuarenta y ocho.- PRESIDENCIA DE LA TERCERA SALA.

Agréguese a sus antecedentes el escrito recibido el--
diecisiete de los corrientes, firmado por Arnulfo Zárate Pa-
lacios, diciéndose apoderado del tercero perjudicado en este
amparo y la copia certificada que a dicho escrito se acompa-
ña; comprobada que sea en autos la personalidad con que se --
ostenta el promovente, se proveerá lo que corresponda. Noti-
fíquese.

TERCERA SALA.
D. 8834/47/2a.

Lo acordó y rubricó el ciudadano Presidente. Doy fe.

En tus de abril de mil novecientos cuarenta y ocho, pasó este Asunto al C. Actuario.
C. Monte

(LT)

El 11 de ABR 1948 por lista de la misma fecha se notificó la
resolución que antecede a las inter-
responsables y al Ministerio Público Federal.

TERCERA SALA.
D.8834/47/2a.

#xico, Distrito Federal, a once de mayo de mil nove-
cientos cuarenta y ocho.- PRESIDENCIA DE LA TERCERA SA
LA.

Agréguese a sus antecedentes el escrito recibido
el veintiséis de abril último, firmado por Arnulfo Zára-
te Palacios y la copia certificada que a dicho escrito se
acompaña; en mérito de dicha copia, téngase al promovente
en su carácter de apoderado especial del señor Luis Bonar-
di, tercero perjudicado en este amparo; asimismo para que
surtan los efectos legales a que hubiere lugar, téngase --
por presentado el escrito del mencionado apoderado, recibi-
do el diecisiete de marzo del año en curso y la copia cer-
tificada que con dicho escrito se acompaña. Pasen estos au-
tos para su estudio al C. Ministro a quien correspondieron
en turno. Notifíquese.

Lo acordó y rubricó el ciudadano Presidente. Doy fe.



*En tres de junio de mil novecien-
tos cuarenta y ocho, pasó este
Auto al Sr. Actuario. Conste*

25 JUN 1948
[] , por lista de
la misma fecha, se notificó la resolución
anterior a los interesados.



Amparo directo 8834/47 María Luisa
González Vs. Sala del Tribunal en
Mexicali, B.C.

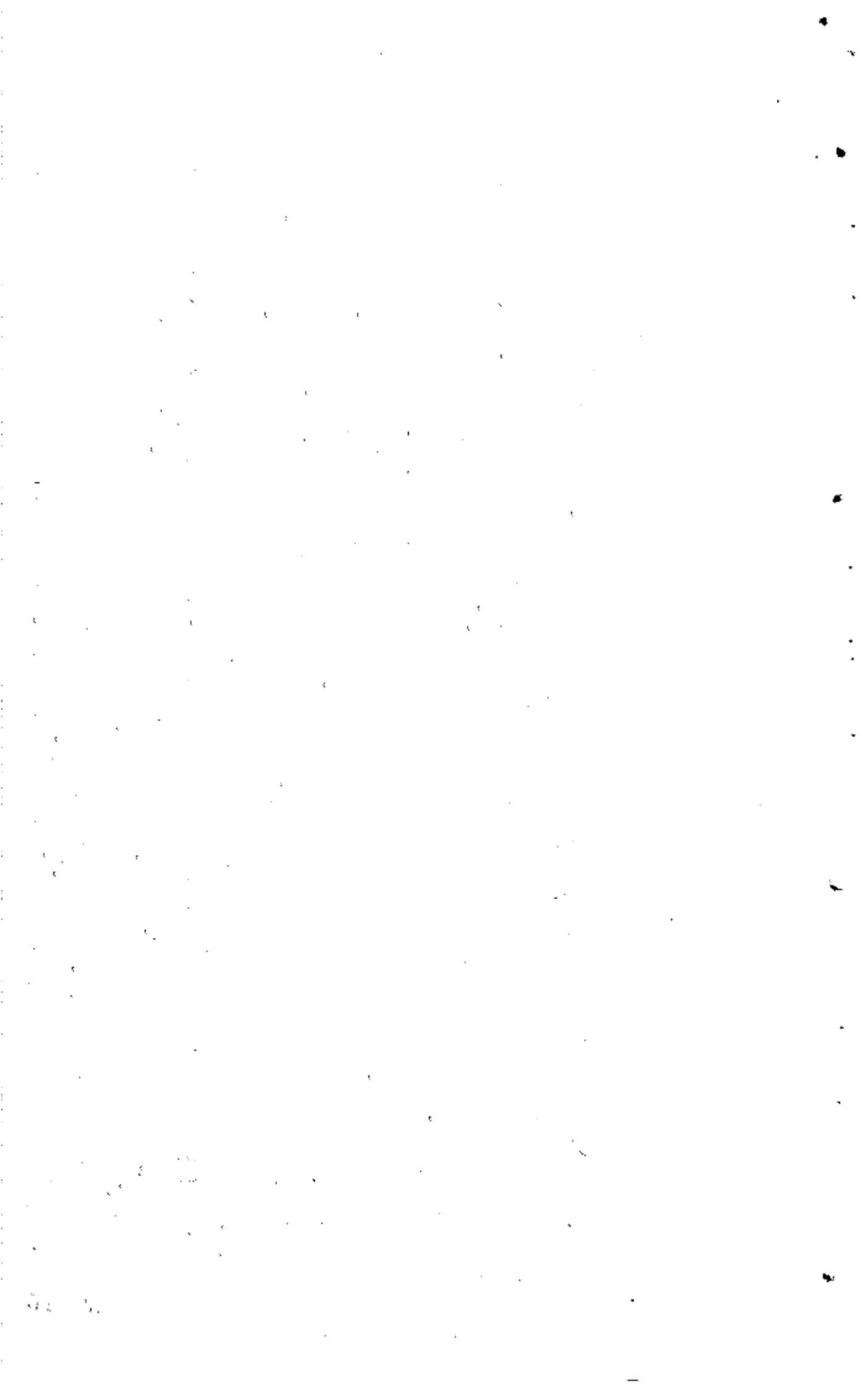
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

Arnulfo Zárate Palacios, abogado, con cédula de ejercicio profesional 2249 expedida por la Dirección General de Profesiones, ante V.H. respetuosamente comparezco y expongo:

En el amparo arriba indicado, donde tengo reconocido el carácter de apoderado del señor LUIS BONARDI, tercero perjudicado en el mismo, el C. Agente del Ministerio Público Federal en su pedimento, después de reconocer, como no podía menos de hacerlo, que ninguno de los agravios esgrimidos por la quejosa María Luisa González se encuentra fundado, inexplicablemente solicita al final de su citado pedimento que se conceda el amparo, argumentando que esa -- Suprema Corte debe proceder en tal forma porque habiendo ejercitado mi mandante la acción reivindicatoria de los terrenos de su propiedad que indebidamente venía detentando la quejosa, no acompañó original el título de su referida propiedad, siendo esto indispensable, en su concepto de acuerdo con una ejecutoria aislada que se publicó en el Informe de la Presidencia de esa H. Suprema Corte correspondiente al año de 1936, para que proceda la reivindicación.

En defensa de los intereses de mi mandante, a quien --- perjudica la ligera apreciación del Ministerio Público, --- me permito expresar a esa H. Suprema Corte que el caso resuelto en la Ejecutoria 12457/32, relativa al amparo solicitado por Rosalío Díaz de León, es enteramente diverso al caso que motiva el amparo de la señora María Luisa González, pues en tanto que en aquél el reivindicante estuvo en posibilidad de presentar su título original, en éste, o sea en el caso del Sr. Bonardi el título se extravió, o fue destruido por la propia quejosa, pues consta en los autos del juicio que ésta violentó la cerradura de una --- petaca y substraigo papeles de mi representado, entre los cuales estaba su escritura de propiedad, razón por la --- cual al contestar la temeraria demanda de la quejosa, para reivindicar su propiedad no tuvo otro recurso que solicitar una copia de la inscripción en el Registro Público, ya que tratándose de una escritura privada no podía obtener otra prueba diversa del contrato.

Aparte de lo anterior, la quejosa no combatió ni en la primera ni en la segunda instancia la validez del título del reivindicante, pues aunque lo aludió en forma incidental, su defensa consistió en hacer creer el hecho falso y temerario de que tenía muchos años de poseer a nombre propio el terreno de la propiedad de mi mandante, por cuyo motivo solicitó la adquisición por prescripción, habiendo demandado a mi mandante precisamente porque su título aparecía inscrito en el Registro Público, de tal suerte que la propia quejosa en su demanda reconoció la propiedad de mi mandante ya que demandó la extinción de su inscripción para que se le inscribiera a ella como dueña. En tal concepto y siendo el amparo civil de estricto derecho, no puede suplirse, como lo hace el Ministerio Público la defi-



ciencia de la demanda de la quejosa, ya que ésta se concretó durante el juicio a alegar hechos falsos para fundar la adquisición por prescripción que demandó, sin que hubiese impugnado en forma legal el título de mi mandante, que, por otra parte, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Ensenada, hace prueba del hecho referido de la propiedad contra todos los terceros, de acuerdo con lo que al respecto dispone el Código Civil. Y esa inscripción, mientras no se nulifique o cancele, hace prueba plena de la propiedad a favor de mi mandante Luis Bonardi y constituye título legal para fundar la reivindicación contra cualquier poseedor, pues lo contrario sería absurdo y jurídicamente inadmisibles, ya que por la pérdida o extravío de una escritura privada de propiedad, no obstante la inscripción en el Registro Público se autorizaría el despojo y el atraco de terceros de mala fe.

Para que esa H. Suprema Corte norme su criterio, al presente escrito me permito acompañar en copia certificada la Ejecutoria pronunciada en el amparo 12457/32, que cita el C. Agente del Ministerio Público, para que se vea que el caso resuelto en aquel juicio es enteramente diverso al planteado en el presente caso por la señora María Luisa González, cuya temeridad y mala fe para apropiarse de los bienes de mi mandante llegó al extremo de confeccionar un título de propiedad ad-hoc (una información ad perpetuum con testigos falsos), que inscribió en el Registro Público y que ofreció como prueba de su acción de prescripción adquisitiva, título que el juez de Ensenada no se atrevió siquiera a analizar por su notoria ineffectividad, lo que hace evidente que es aplicable al caso la jurisprudencia de esa Suprema Corte constante en las tesis 18 y 19, pags. 54 y 57 de la Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Apéndice al Tomo LXXVI, que contiene la jurisprudencia firme de ese H. Tribunal, en el sentido de que "cuando el reivindicante tiene un título de propiedad y el demandado no tiene ninguno, aquél título basta para tener por demostrado el derecho del actor, siempre que dicho título sea anterior a la posesión del demandado". El título de propiedad de mi mandante es indiscutible y no fue además discutido, en tanto que el título o pretendido título de la quejosa ni siquiera fue analizado en el juicio y no combate esa inadvertencia del juzgador, que tampoco podría beneficiarle.

Por lo expuesto,

A V. H. solicito:

Que en nombre del Sr. Luis Bonardi, tercero perjudicado, cuyos intereses represento como apoderado legal, tenga por exhibida la copia que acompaño de la Ejecutoria que cita el C. Agente del Ministerio Público, para que se advierta que se trata de un caso diverso al planteado en este juicio por la señora María Luisa González; y que en su oportunidad se niegue el amparo a la quejosa.

Protesto lo necesario.

México, D.F. a 16 de marzo de 1948.

Arnaldo Zárate Palacios

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACION

MAR 17 10 19 AM '48

OFICINA DE
CERTIFICACION
Y CORRESPONDENCIA

22485

del signatario,
con el correo que se cita
en siete folios.
Montesinos

94/



El ciudadano licenciado Francisco Parada Gay,
Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de -
Justicia de la Nación,

C E R T I F I C A: que en el juicio de amparo
Directo número doce mil cuatrocientos cincuenta y siete
del año de mil novecientos treinta y dos, promovido por
Rosalío Díaz de León, contra actos de la Primera Sala del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Poto-
sí, obra una ejecutoria que a la letra es como sigue:----
-----"México, Distrito Federal. Acuerdo de la Ter-
cera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
del día quince de abril de mil novecientos treinta y seis.
-- VISTOS los autos del juicio de amparo promovido por el
señor Rosalío Díaz de León, ante esta Suprema Corte de --
Justicia, contra actos de la Primera Sala del Supremo ---
Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que -
considera violatorios de las garantías que consagran los
artículos 14 y 16 constitucionales; y,-- R E S U L T A M _
D O:-- PRIMERO.- Por escrito de diecisiete de agosto de
mil novecientos treinta y dos, se presentó el señor Rosa-
lío Díaz de León, ante esta Suprema Corte de Justicia, --
en demanda de amparo contra actos de la autoridad mencio-
nada, exponiendo: que demandó a don José María Caballero,
en la vía ordinaria civil, por la propiedad, posesión y -
entrega de la casa número 46 de la calle de Sevilla y Ol-
medo de la ciudad de San Luis Potosí, por los daños y --
perjuicios y las costas del juicio, fundándose en que por
escritura privada de 30 de abril de 1912, otorgada ante -
los testigos Francisco Rivera y José G. Saucedo, adquirió
de don Atilano Silva la casa de que se trata, de la que -
estuvo en posesión hasta julio de 1931, en que fué priva-



do de la propiedad por mandamiento de la Administra-
ción Principal de Rentas de la citada población, habien-
do averiguado que esta Oficina mandó sacar a remate di-
cho inmueble, por contribuciones adeudadas por la seño-
ra Micaela Bueno de Silva, y fué adjudicado al señor Ro-
berto Navarro quien lo vendió al demandado; que el señor
José María Caballero negó la demanda diciendo: que no se
precisaba lo que se reclamaba por daños y perjuicios; que
no reconocía valor alguno a los documentos en que se apo-
yaba la acción y que, aunque era cierto que había entra-
do en posesión de la finca indicada, no había sido arbi-
trariamente sino por mandamiento de la Administración de
Rentas; que rindió como pruebas, copia certificada de la
inscripción del título que ampara la propiedad de la fin-
ca, informe del Registro Público de la Propiedad de que
dicho inmueble se encontraba registrado desde 1912 a ---
nombre del actor quien lo adquirió de Atilano Silva y és-
te de Francisco Bueno, e inspección judicial para iden-
tificar la propiedad; que el Juez pronunció sentencia, -
resolviendo: I.- El actor probó su acción; II.- El de-
mandado no probó sus excepciones; III.- se declara al --
señor Rosalío Díaz de León único y legal propietario y
poseedor de la casa número 46 de la calle de Sevilla y -
Olmedo de esta Ciudad, con las medidas y colindancias --
que se expresan en el Resultando Primero de este fallo;
IV.- Se condena al señor José María Caballero a entregar
al señor Rosalío Díaz de León la mencionada casa y a pa-
garle, además, por concepto de daños y perjuicios, los -
frutos que haya producido o haya dejado de producir la -
finca, a partir de la fecha de la demanda y hasta que --
sea desocupada y entregada la casa; V.- Se condena, ----
igualmente, al señor José María Caballero a pagar al se-

30/



Por Rosalío Díaz de León las costas y gastos de este --
juicio; VI.- Se fijan al señor José María Caballero tres
días contados desde el siguiente en que causa ejecutoria
este fallo para que cumpla esto; que don José María Ca--
ballero apeló de esa sentencia y la Primera Sala del Su--
premo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, el 29 de --
junio de 1932, falló como sigue: "Primero.- el actor, se--
ñor don Rosalío Díaz de León, no probó la acción reivin--
dicatoria ejercitada respecto a la casa ubicada en la ca--
lle de Sevilla y Olmedo número cuarenta y seis, con las --
medidas y colindancias que se expresan en el certificado
del Registro Público de la Propiedad, fojas una del cua--
dermo principal.- Segundo.- En consecuencia, se absuelve
al reo señor José María Caballero, de la demanda reivin--
dicatoria en su contra entablada, y se declara como el le--
gítimo propietario de la casa aludida, en cuya posesión
legal se haya actualmente.- Tercero.- Se condena al señor
don Rosalío Díaz de León al pago de las costas y gastos --
del juicio de ambas instancias"; y que esa sentencia vio--
la en su perjuicio las garantías que consagran los artí--
culos 14 y 16 de la Constitución Federal: I.- Porque, en
el primer punto resolutivo, declara que no probó la ac--
ción reivindicatoria, fundándose en los argumentos con--
tenidos en los seis primeros considerandos referentes a --
la falta de presentación del título en que se funda la --
acción, o sea del documento original en que se hizo cons--
tar el contrato de compraventa de la casa mencionada, y --
se le desconoce el carácter de propietario, interpretan--
do erróneamente el artículo 14 del Código de Procedimien--
tos Civiles al suponer que para la procedencia de la ac--
ción real exige imperativamente el contrato original en --

que se consignó la oneración de que dimanaran los derechos reclamados, siendo que únicamente determina que se acompañe el título legal en que se funda, y el fundamento de la acción no lo constituye exclusivamente el contrato que le dió origen, sino cualquier otro documento del que aparezca un principio de prueba de los derechos sujetos a debate en el juicio, y tan es así, que el artículo 1/o. del mismo Código establece, que el ejercicio de las acciones civiles requiere la existencia de un derecho y su violación y desconocimiento, y esas disposiciones legales fueron ampliamente satisfechas, porque, al entablarse la demanda y en el término probatorio, rindió las pruebas necesarias que acreditan su carácter de propietario de la casa que reclama, es decir, justificó su derecho respecto a ese inmueble y al título que sirvió de fundamento a la acción reivindicatoria, ya que por medio del certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad, que acompañó a la demanda y que hace prueba plena de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 405 del Código citado, demostró que el 10 de febrero de 1913 presentó para su registro una escritura privada de venta otorgada en San Luis Potosí el 31 de enero anterior, por la que consta que el señor Atilano Silva le vendió la casa número seis y medio, antiguo, de la calle de México, ahora Sevilla y Olmedo número 46, y, según el artículo 3190 del Código Civil, si ese contrato se registró fué porque indiscutiblemente demostró que era el dueño de la finca, por lo que ese certificado demuestra el contrato de compraventa por el que adquirió los derechos de propiedad y posesión, conforme a los artículos 2811, 2818, 2822, 2921 y demás relativos del Código

15/



Civil, y, sin embargo, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí desconoce el valor probatorio de tal certificado, lo que implica el desconocimiento de la inscripción y de sus derechos de propiedad, aplicando inexactamente la ley; II.- Porque si es cierto que las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, aunque constituyen prueba plena de un derecho, -- pueden ser objetadas como todos los títulos que amparan la propiedad de bienes raíces, mientras no se declaren -- nulas implican verdaderos derechos a favor de quien se -- hacen y demuestran los derechos a que se refiere, toda -- vez que según los artículos 3219 y 3221 sólo pueden cancelarse cuando se extinga el inmueble a que se refiere, -- cuando se extinga el derecho inscripto, cuando se declare la nulidad del título o cuando se declare la nulidad de -- la inscripción, y como, en el caso, la parte demandada -- se limitó a negar la demanda sin atacar la validez de la inscripción y sin contrademandar por su nulidad, dicha -- inscripción quedó firme con todos sus efectos legales. y, por consiguiente, el criterio de la Sala en lo relativo -- a que es indispensable la prestación del título original para comprobar el dominio de la propiedad, no es correcto, ya que la inscripción también es título; III.- Porque se omitió el estudio de los demás aspectos de la cuestión; como son la identificación de la cosa reclamada que es -- parte integrante de la acción ejercitada, identificación que se llevó a cabo mediante un certificado de la Tesorería Municipal, y las inspecciones judiciales que hacen -- prueba plena, de acuerdo con los artículos 405 y 412 del Código de Procedimientos Civiles, y no obstante esa iden-

tificación, la Sala no hizo consideración alguna sobre ese punto y se limitó al examen del título al que no le dió ningún valor, sin atender a los preceptos legales aplicables; IV.- Porque la Sala comete el error de sostener que el demandado no estuvo obligado a justificar su derecho sobre la casa objeto del juicio, siendo que en los autos obra un oficio de la Administración Subalterna de Rentas de San Luis Potosí en que se dice que dicha casa fué rematada por esa Oficina en pago de contribuciones y adjudicada al señor Roberto Navarro Jiménez, quien la vendió a Guillermo Marín y éste a don José María Caballero, a quien se le dió posesión por el Ejecutor, que el adeudo de contribuciones que originó el remate era de doña Micaela Bueno de Silva, y que exponente negó que el demandado tuviera derecho alguno, lo que comprobó con el certificado del Registro Público de la Propiedad, que asienta que doña Micaela Bueno de Silva, causante de don José María Caballero, jamás fué dueño de esa finca, por lo que el título del señor Caballero es ineficaz y no produce efectos contra su legítimo dueño; V.- Porque en consecuencia de lo expuesto, estando demostrado que se le privó de la posesión y que su título es anterior, la autoridad responsable debió restituirlo en la posesión acatando lo dispuesto en los artículos 856, 857, 858 y 860 del Código Civil que dejó de aplicar; VI.- Porque la misma autoridad sentenciadora dejó de aplicar los artículos 863 y 864 del Código citado, porque no obstante estar acreditado que es propietario, con títulos mejor que el del señor Caballero, relevó a éste de la obliga-

32/



ción de resarcirlo de los daños y perjuicios, así como de los gastos que le ha causado durante la ocupación de la casa arbitraria e ilegalmente; y VII.- Porque ha querido aplicar a las escrituras privadas el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles el cual no se puede hacer extensivo a los casos de excepción de las escrituras privadas que una vez registradas surten efectos contra tercero, sin que, en contrario, pueda objetarse que no se exhibió el original de la escritura privada, porque -- esto, aparte de que la ley no lo exige de modo expreso, -- no puede abarcar los casos en que se extravíe un documento, y sería absurdo que cuando ocurre un extravío no pudiera subsanarse por alguna forma legal, como se ha hecho, y, además, la falta de presentación del título, si cupiera legalmente, debería haber sido materia de recurso contra el auto que admitió la demanda, pero no puede apreciarse en la sentencia.-- SEGUNDO.- Recibida la demanda con la copia certificada de constancias solicitadas por los interesados y el informe de la autoridad señalada como responsable, con el aviso de haberse notificado a la contraparte del quejoso, se pasaron los autos al Ministerio Público, quien formuló pedimento en el sentido de que se niegue la protección solicitada; y-- C O N S I D E -- R A N D O:-- PRIMERO.- El acto reclamado, consistente en la sentencia dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, el 29 -- de junio de 1932, se comprobó plenamente con el informe -- rendido por dicha autoridad y con las copias certificadas que obran en autos.-- SEGUNDO.- El primero de los --

agravios reclamados por el señor Rosalío Díaz de León, como ya se dijo, se hace consistir, concretamente, en -- que la aludida sentencia resuelve que no probó la acción reivindicatoria porque no presentó original el documento en que se hizo constar el contrato de compraventa de la finca reclamada, interpretando erróneamente el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles, porque se con-- sidera que para que proceda la acción real de dominio es indispensable que se acompañe el contrato de que dima-- nan los derechos reclamados, siendo que ese título no -- constituye el único fundamento de la acción, sino que -- también tiene el mismo carácter cualquier otro documento del que aparezca un principio de prueba, como se desprén-- de del artículo 1/o. del mismo Código; y esas disposi-- ciones quedaron satisfechas al acompañar a la demanda y rendir durante el término respectivo la prueba que lo -- acredita como propietario, como es el certificado expedi-- do por el Registro Público de la Propiedad, que hace -- prueba plena, según el artículo 405 del Código citado, -- de que el 10 de febrero de 1912 presentó para su regis-- tro una escritura privada por la que, el 31 de enero an-- terior, don Atilano Silva le vendió la casa que reclama, pues si, según el artículo 3190 del Código Civil, ese -- registro sólo pudo hacerse porque constaba que él era -- el legítimo dueño de la finca, tal certificación demues-- tra el contrato de compraventa de acuerdo con los artícu-- los 2811, 2818, 2822, 2921 y demás relativos del Código Civil, y, a pesar de eso, la autoridad responsable le -- desconoce su valor probatorio. El agravio es infundado ;

3/



y debe desecharse, porque siendo indiscutible que el --
señor Díaz de León ejercitó la acción de dominio sobre --
la casa número 46 de la calle de Sevilla y Olmedo de San
Luis Potosí, estaba obligado a probar la existencia de su
derecho y la violación de ese derecho por parte de don --
José María Caballero, es decir, debió probar que era pro--
pietario de la finca cuya reivindicación solicitó y que --
su propiedad había sido usurpada por el señor Caballero --
y como para acreditar lo primero sólo presentó un certi--
ficado del Registro Público de la Propiedad, en el que --
aparece la siguiente constancia: "Hoy 10 de febrero de --
1912 mil novecientos doce, se presentó por duplicado y --
para su registro, una escritura privada de venta con pac--
to de retroventa, otorgada en esta ciudad el día 31 treint--
ta y uno de enero próximo pasado, por la que consta que --
el señor Atilano Silva, vendió al señor Rosalío Díaz de --
León, con pacto de retroventa y plazo de cuatro años la --
finca descrita al principio, en la suma de \$180.00 cien--
to ochenta pesos; en el concepto de que, si dentro del --
término estipulado al señor Silva no hiciere uso del ---
retrato, se dará por vencido el plazo, y quedará irre--
vocablemente consumada la venta como lo dispone el ar---
tículo 2904 del Código Civil; dicha propiedad la adquirió
el vendedor por compra que de ella hizo el señor Fran---
cisco Ignacio Bueno, según escritura privada fecha 29 --
veintiocho de noviembre de 1906 mil novecientos seis...",
y ese certificado seguramente no constituye el título --
de propiedad de la finca que se pretende reivindicar, --
porque tratándose de un bien inmueble cuyo valor es me--
nor de quinientos pesos, el título de propiedad no puede
estar constituido más que por la escritura privada de --

compraventa, según los artículos 2920 y 2921 del Código Civil, resulta que el actor no comprobó el primer elemento de su acción, pues para lograrlo estaba obligado a presentar la escritura relativa, cuya eficacia no puede ser suplida con el certificado exhibido, que, aunque es cierto que, en su carácter de documento público, hace prueba plena, ese valor probatorio no puede extenderse a más de la existencia de la inscripción. De consiguiente, la sentencia materia de la queja, que resolvió que por la falta del mencionado título de propiedad no se justificó la acción reivindicatoria ejercitada, está arreglada a derecho y no es violatoria, por este concepto, de las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales.-- TERCERO.-- Lo expuesto en el considerando anterior es suficiente para declarar infundados los otros agravios reclamados por el quejoso, que no son más que repetición o consecuencia del que antes se estudia, pues, como se expresa en la parte expositiva de esta sentencia, se hacen consistir: en que la inscripción en el Registro Público demuestra los derechos a que se refiere, mientras que se declara nula, y por consiguiente, la argumentación que hace la autoridad responsable para llegar a la conclusión de que debió presentarse el contrato original es incorrecta, porque la constancia del Registro también constituye un título; en que no se tomó en cuenta la identificación de la finca reclamada, que se llevó a cabo por medio de la inspección judicial y del certificado expedido por el Tesorero Municipal, que hacen prueba plena de acuerdo con los artículos 405 y 412 del Código de Procedimientos Civiles.

74/



les; en que en la sentencia señalada como acto reclama_
do se cometió el error de sostener que el demandado no -
estaba obligado a justificar sus derechos sobre la casa -
objeto del juicio, a pesar de que de las constancias de -
autos aparece que la persona que se dice su causante fué
propietaria de esa finca, por lo que es ineficaz y care--
ce de valor el título del señor Caballero; en que no se -
aplicaron los artículos 863 y 864 del Código Civil, no -
obstante haber acreditado su propiedad con título mejor -
que el del demandado a quien se le releva de la obliga--
ción de indemnizarlo de los daños, perjuicios y gastos -
que le ha originado; y en que se aplicó a las escrituras
privadas el artículo 408 del Código de Procedimientos --
Civiles que, como excepción, no es aplicable a las es--
crituras privadas registradas que surten efectos contra
tercero, sin que contra ello pueda objetarse que no se -
presentó la escritura original, porque esa omisión debió
reclamarse recurriendo el auto que dió entrada a la de--
manda, pero no puede ser materia de la sentencia; agra--
vios que, además, son infundados por las siguientes razo_
nes: porque la teoría sostenida por la autoridad respon--
sable sobre que, tratándose de una acción reivindicato--
ria, el actor debe acreditar su dominio independiente--
mente de que el demandado pruebe su derecho, es absolu--
tamente correcto, ya que si el actor no prueba ser pro--
pietario del inmueble que trata de reivindicar, no pue--
de considerarse justificada la acción correspondiente --
aunque el demandado posea sin derecho; porque la iden--
tificación de la finca reclamada con aquella a que se --
refiere el certificado del Registro Público de la Pro--
piedad no subsana la falta de prueba de la acción; por--

que siendo inexacto que el señor Díaz de León haya --
justificado que es propietario de la casa que pretende
reivindicar, no hay motivo legal para condenar al señor
Caballero al pago de daños y perjuicios; porque las --
consideraciones que, en términos generales, se hacen --
respecto al valor y fuerza de las escrituras privadas --
en nada afectan las conclusiones a que se llega en la --
sentencia, porque esas consideraciones abstractas no se
refieren ni pueden referirse a la escritura por la que
dice el quejoso que adquirió la finca que reclama y que
no presentó en el juicio; y porque, como lo estima la --
propia autoridad responsable, la procedencia de una ac-
ción no puede quedar establecida por el auto que admita
la demanda y menos cuando, como en el caso, se presen-
tó para fundarla un documento cuyo examen y valorización
no puede hacerse más que en la sentencia definitiva. ---
Siendo, pues infundados los agravios alegados no hay ra-
zón para estimar que se han violado en perjuicio del ---
quejoso las garantías que consagran los artículos 14 y
16 constitucionales y debe negársele la protección que
solicita.--- Por lo expuesto, se resuelve:-- PRIMERO.--
La Justicia de la Unión no ampara ni protege al señor --
Rosalío Díaz de León contra actos de la Primera Sala --
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis
Potosí, consistentes en la sentencia definitiva dicta-
da por dicha autoridad, el 29 de junio de 1932, en el --
juicio ordinario civil seguido por dicho señor Díaz de --
León en contra de don José María Caballero, sobre rei-
vindicación de la casa número 46 de la calle de Sevilla
y Olmedo de la Capital del Estado.--- SEGUNDO.-- Notifí--



Cotejada.

Vo. Bo.

quese; remítase copia de esta resolución a la autoridad señalada como responsable; y, en su oportunidad, archívese este toca.-- Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Olea, Ebofi Paniagua, Bazdresch y Presidente Ruíz, contra uno del señor Ministro Pérez Gasga, quien votó porque se concediera el amparo.-- Firman los CC. Presidente y Ministros que integraron la Sala con el Secretario de la misma que autoriza y da fe.-- EL PRESIDENTE: Franco. H. Ruíz.-- MINISTROS: Alfonso Pérez Gasga.-- S. M. Olea.-- A. Ebofi Paniagua.-- L. Bazdresch.-- Rúbricas.-- EL SECRETARIO: Arturo Puente y F.-- Rúbrica".-----

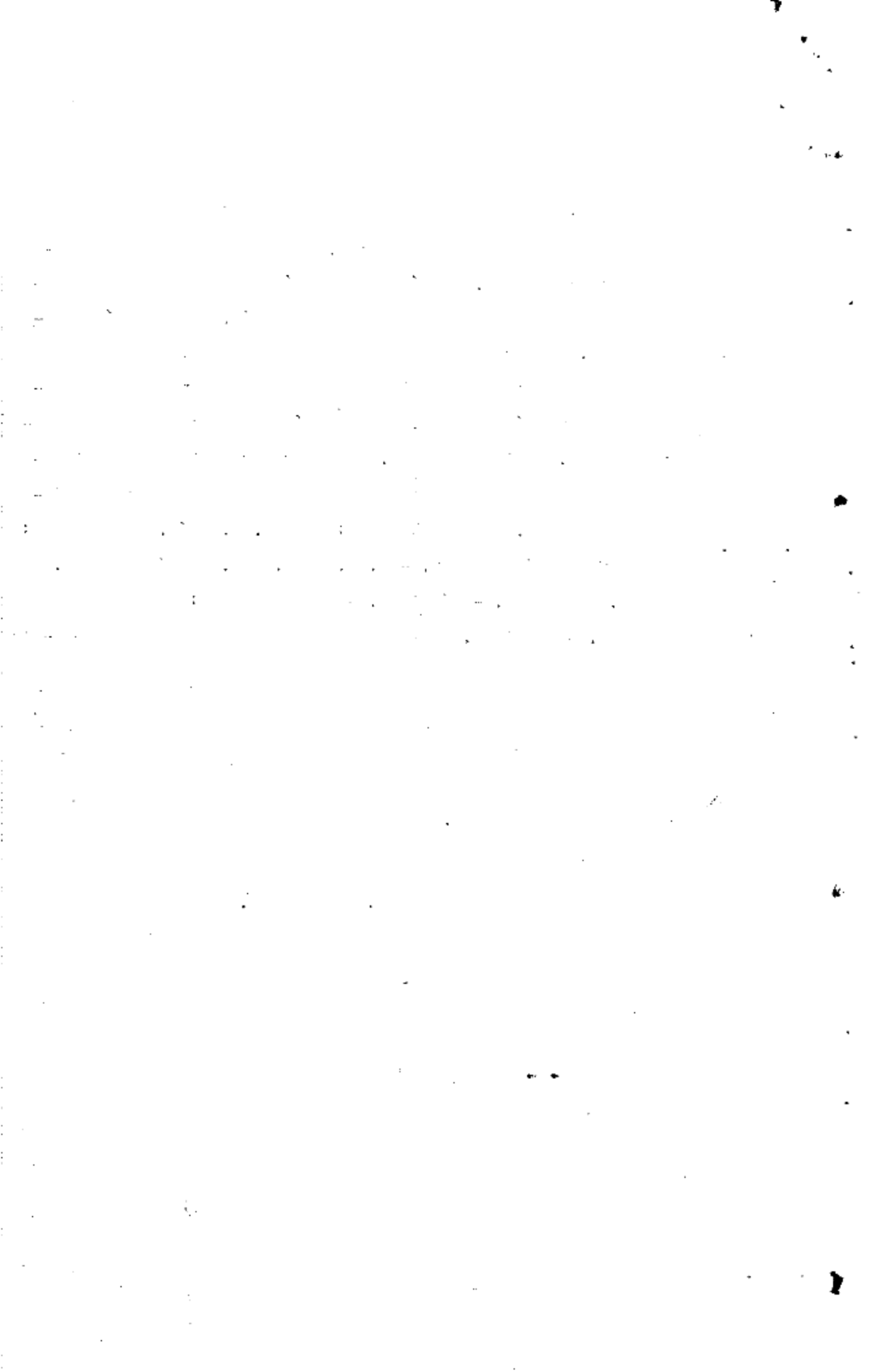
Y en cumplimiento de lo mandado en auto de esta fecha, expido la presente copia certificada, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho.


F. PARADA GAY.



S.P./S.

MEXICO



Lic. Arnulfo Zárate Palacios

CEDULA HUM, 291 D. E. P.

HUMBOLDT NUM. 39-5
MEXICO, D. F.

MEXIGAMA 36-41-55
ERICSSON 12-52-18

36/

Amparo directo No. 8834/47-2a.
María Luisa González Vs. Tribu--
nal de la Baja California.
Tercero: LUIS BONARDI.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

Arnulfo Zárate Palacios, abogado, como -
apoderado del señor don Luis Bonardi, tercero perjudicado en
el amparo en que comparezco, respetuosamente expongo:

En una hoja útil acompaño copia certificada
cada expedida por el Secretario de la Sala del Tribunal que -
radica en Mexicali, B.C., que acredita que soy apoderado del
señor Luis Bonardi que tiene el carácter de tercero perjudi--
cado en el amparo en que promuevo.

De acuerdo con lo anterior solicito que
se me reconozca personalidad en los autos del amparo referi--
do y que se acuerde mi escrito anterior, pasándose los autos
a la 3a. Sala de esa H. Suprema Corte para que el Sr. Minis--
tro Ponente haga el estudio correspondiente.

Protesto lo necesario.

México, D.F. a 26 de abril de 1948.

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACION

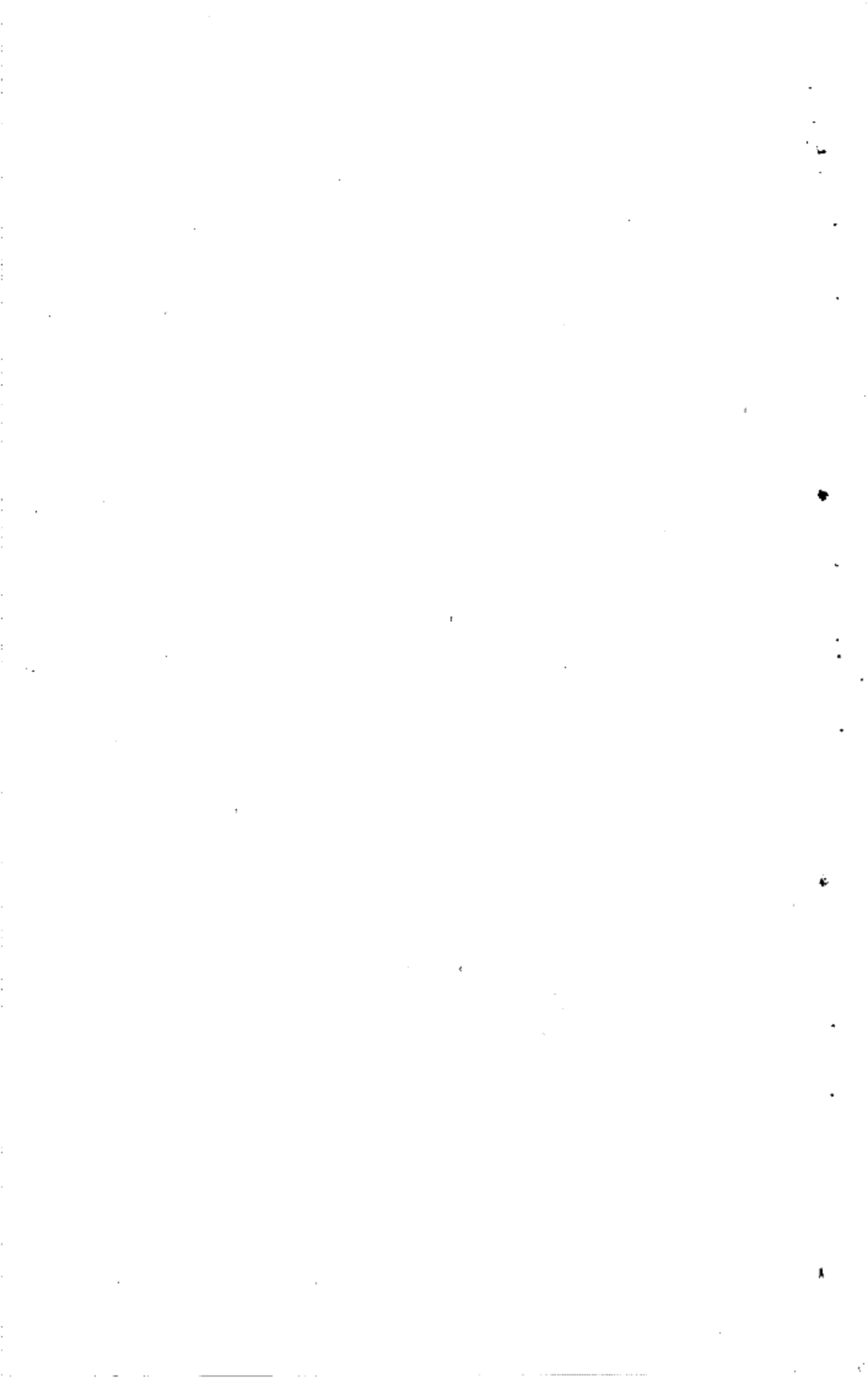
Arnulfo Zárate Palacios

ABR 26 1 00 PM '48

RECIBIDA DE
CERTIFICADO 32657
Y CORRESPONDENCIA

del signatario, con
el anexo que se cita.

[Firma]





SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. CFA.



SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. CFA.

EL CIUDADANO LICENCIADO RODOLFO SOSA Y SILVA, SECRETARIO DE ACUERDOS
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERA-
LES EN EL TERRITORIO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA, C E R T I F I C A :

-- QUE EN EL TOCA NUMERO 9/47 RELATIVO A LA APELACION INTERPUESTA --
CONTRA LA SENTENCIA QUE DICTO EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE-
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE MARIA LUI-
SA GONZALEZ SIGUE EN CONTRA DE LUIS BONARDI, ENTRE OTRAS APARECE LA --
SIGUIENTE CONSTANCIA:-----

"Ensenada, B. Cfa., Febrero 19 de 1947.- Sr. Lic. Arnulfo Zárate Pa-
lacio.- Despacho No. 5 Humboldt No. 39.- México, D.F.- Muy señor mío
Por medio de la presente, le confiero a usted poder para que me re-
presente en los autos del TOCA formado con motivo de la apelación --
que promoví ante el H. Tribunal de Justicia del Distrito y Territo-
rios Federales, en contra de la sentencia definitiva que el C. Juez-
de Primera Instancia de este Partido Judicial de Ensenada, dictó en-
el juicio ordinario civil que siguió en mi contra la señora María --
Luisa González; otorgándole al efecto todas las facultades inheren-
tes a este mandado, las generales y las especiales que requieran --
cláusula de esta naturaleza, sin limitación alguna para que siga --
el juicio en esa segunda instancia y en su caso en la vía de amparo-
si así lo juzgare necesario para la defensa de mis intereses, quedan
do revocados los otros poderes que hubiere yo otorgado en relación --
con este mismo juicio, dándole al efecto facultades para que los re-
voquen si aún no lo estuvieren.- Muy atentamente.- Luis Bonardi. fir-
ma.- Testigo: Una firma ilegible.- Testigo: Alberto Amador.-"-----

"En la ciudad de Ensenada, Territorio Norte de la Baja California, a
los veintinueve días del mes de Febrero de mil novecientos cuarenta y -
siete, el suscrito Licenciado José Pérez Zurita, Juez de Primera Ins-
tancia de éste Partido Judicial, CERTIFICA:- Que con ésta fecha com-
pareció ante mí el señor LUIS BONARDI, y bajo protesta de decir ver-
dad, manifestó: que ratifica en todas y cada una de sus partes el con-
tenido de la carta poder que antecede, por haberla otorgado en favor
del señor Licenciado Arnulfo Zárate Palacio, vecino de la ciudad de-
México, D.F., para los fines que en la misma se indican, y reconoce-
como suya la firma que la calza por ser la misma que usa en todos --

sus asuntos. Por sus geneales manifestó: ser originario de Provin-
cia Cuneo, Italia, ciudadano Mexicano por Naturalización, casado,--
de cincuenta y nueve años de edad, comerciante y con domicilio fren-
te al muelle fiscal nuevo de ésta ciudad.- Ratificó lo expuesto lei-
do que le fué y firmó para constancia ante mí. Doy fé.- Luis Bonardi
firma.- Alejandro Lamadrid.- Rúbrica.- Una firma ilegible.- Al margen
izquierdo del frente y vuelta de la página dos pesos veinte centa-
vos de estampillas del impuesto federal, debidamente canceladas".--

AUTO.

"México, D.F., veinticinco de marzo de mil novecientos cuarenta y -
siete.- Téngase al señor Licenciado Arnulfo Zárate Palacio como apo-
derado especial del señor Luis Bonardi en los términos de la carta-
poder que exhibe; por formulados los agravios que se expresan en el
escrito de cuenta del que se correrá traslado a la contraria con la
copia simple exhibida para que en el término de seis días los con-
teste y por admitida la prueba documental ofrecida.- Lo acordó la -
Tercera Sala y firma el Magistrado Semanero. Doy fé.- Una firma ile-
gible.- Otra firma ilegible!" - - - - -

"En el número 69 del Boletín Judicial correspondiente al 26 veinti-
seis de marzo de 1947 mil novecientos cuarenta y siete, se hizo la
publicación de ley.- Una firma ilegible.- Otro sello que dice: En -
veintisiete del mismo mes a las 12 doce del día surtió sus efectos-
la anterior notificación de acuerdo con lo previsto por la ley.- Doy
fé.- Una firma ilegible.- - - - -

ES COPIA FIRMENTE SACADA DE SU ORIGINAL LA QUE EXPIDO Y CERTIFICO-
EN UNA FOJA ÚTIL PARA ENTREGARLA AL SEÑOR LUIS BONARDI C. POR ACUER-
DO JUDICIAL, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTE DE
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO.- - - - -



LIC. RODOLFO SOSA Y SIENA.

SALA DEL TERRITORIO
NORTE DE LA B. CFA.



TERCERA SALA.
D.8834/47/2a.

México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de mil no-
vecientos cuarenta y nueve.- PRESIDENCIA DE LA TERCERA
SALA.

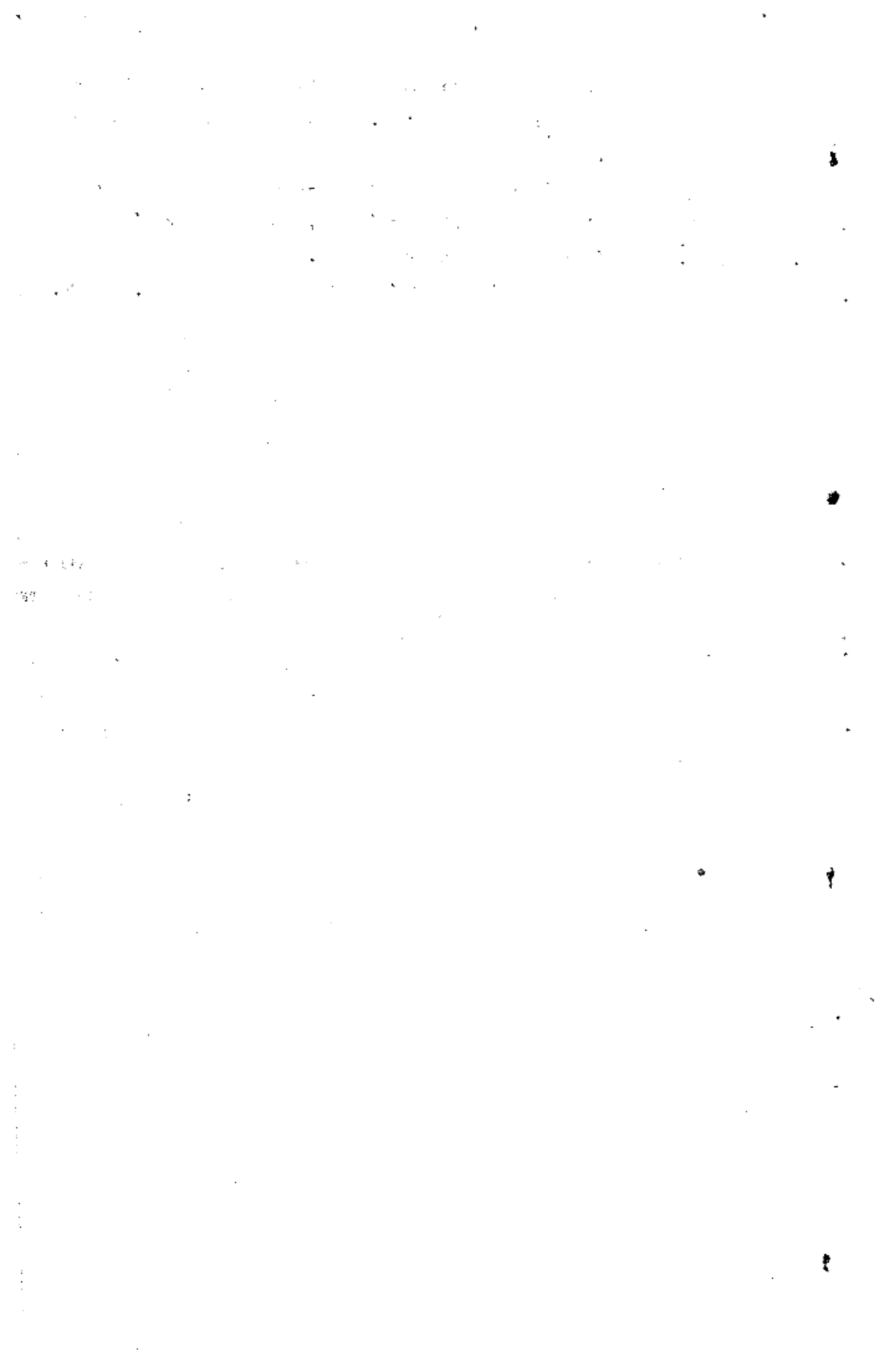
Agréguese a sus antecedentes el escrito recibido el
veinticuatro de diciembre último, firmado por María Luisa
González, quejosa en este amparo.

Lo acordó y rubricó el ciudadano Presidente. Doy fe.

México, Distrito Federal, a once de junio mil nov
cientos cuarenta y nueve ACUERDO de la PRESIDENCIA de la TE
CERA SALA de la SUPREMA CORTE de JUSTICIA de la NACION.

Con fundamento en los artículos 184 y 185 de la Ley Orgáni-
ca de los artículos 103 y 107 constitucionales, se señala para la audie-
cia respectiva en este asunto el día trece del presen-
te y siguientes.

Lo acordó y rubricó el ciudadano Presidente. Doy fe.



C. Presidente de la Tercera Sala
de la H. Suprema Corte de Justicia
de la Nación.-
MEXICO, D.F.-

MARIA LUISA GONZALEZ, compareciendo por mi propio
derecho en el Expediente relativo al amparo directo Número-
8834-47 que ante esa H. Suprema Corte de Justicia interpuse
contra actos de la Sala Territorial del H. Tribunal Superio-
rior de Justicia en este Territorio de la Baja California,-
ante Ud. con el debido respeto comparezco y expongo:-

Que he tenido conocimiento de que el asunto a que
me refiero se encuentra actualmente en la Sección de Turno,
a disposición de esa H. Sala.-

En tal virtud, y a Ud. C. Presidente, con el de-
bido respeto pido que mande pedir el juicio de amparo a que
hago referencia y lo turne al Magistrado correspondiente.-

Protesto lo necesario.-

Ensenada, Baja Calif., a 23 de Noviembre de 1948.-

Maria Luisa González

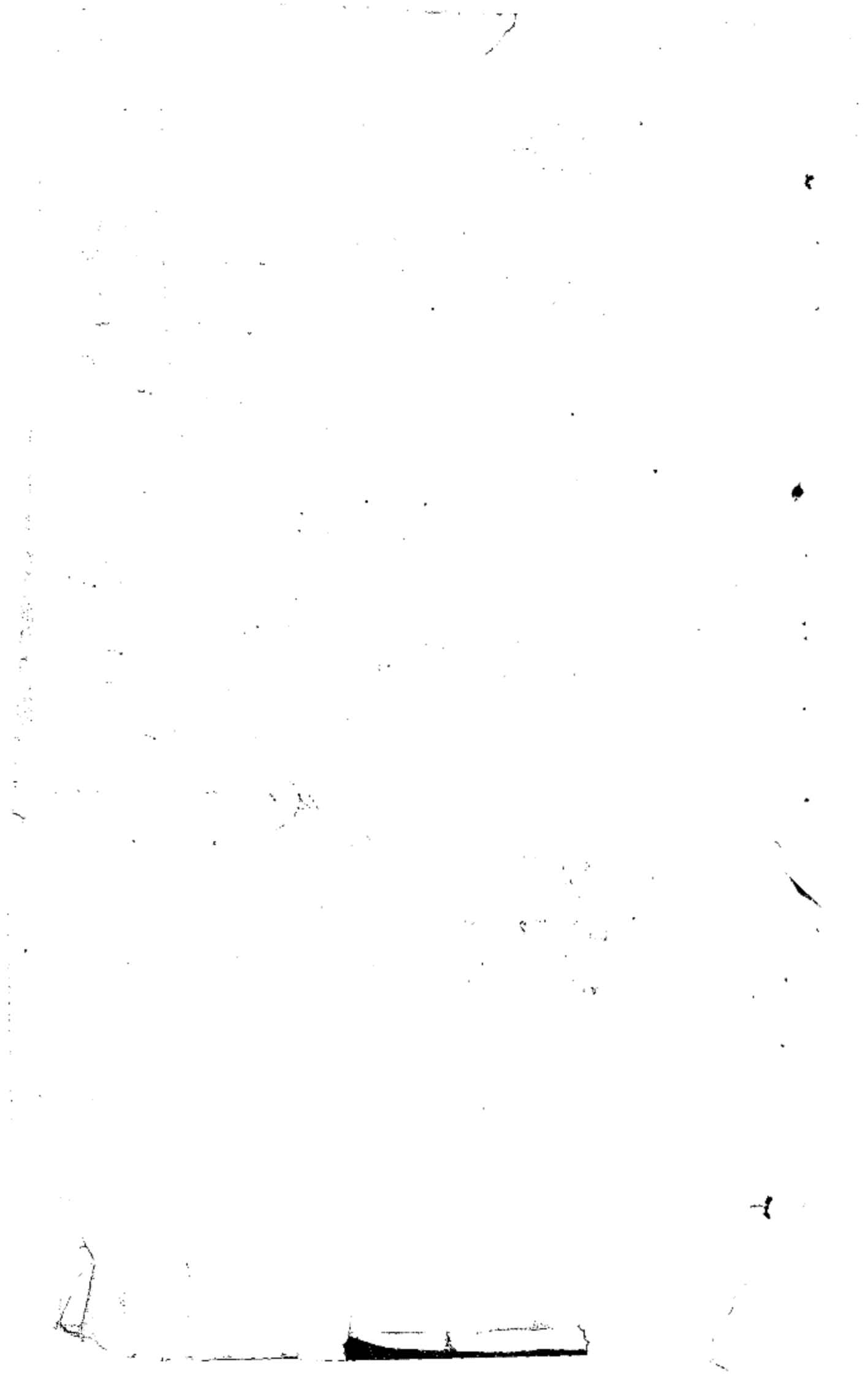
Maria Luisa González.-

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACION

Dic 24 10 21 AM '48

OFICINA DE
CERTIFICACION
Y CORRESPONDENCIA
Por el mes.

[Handwritten signature]



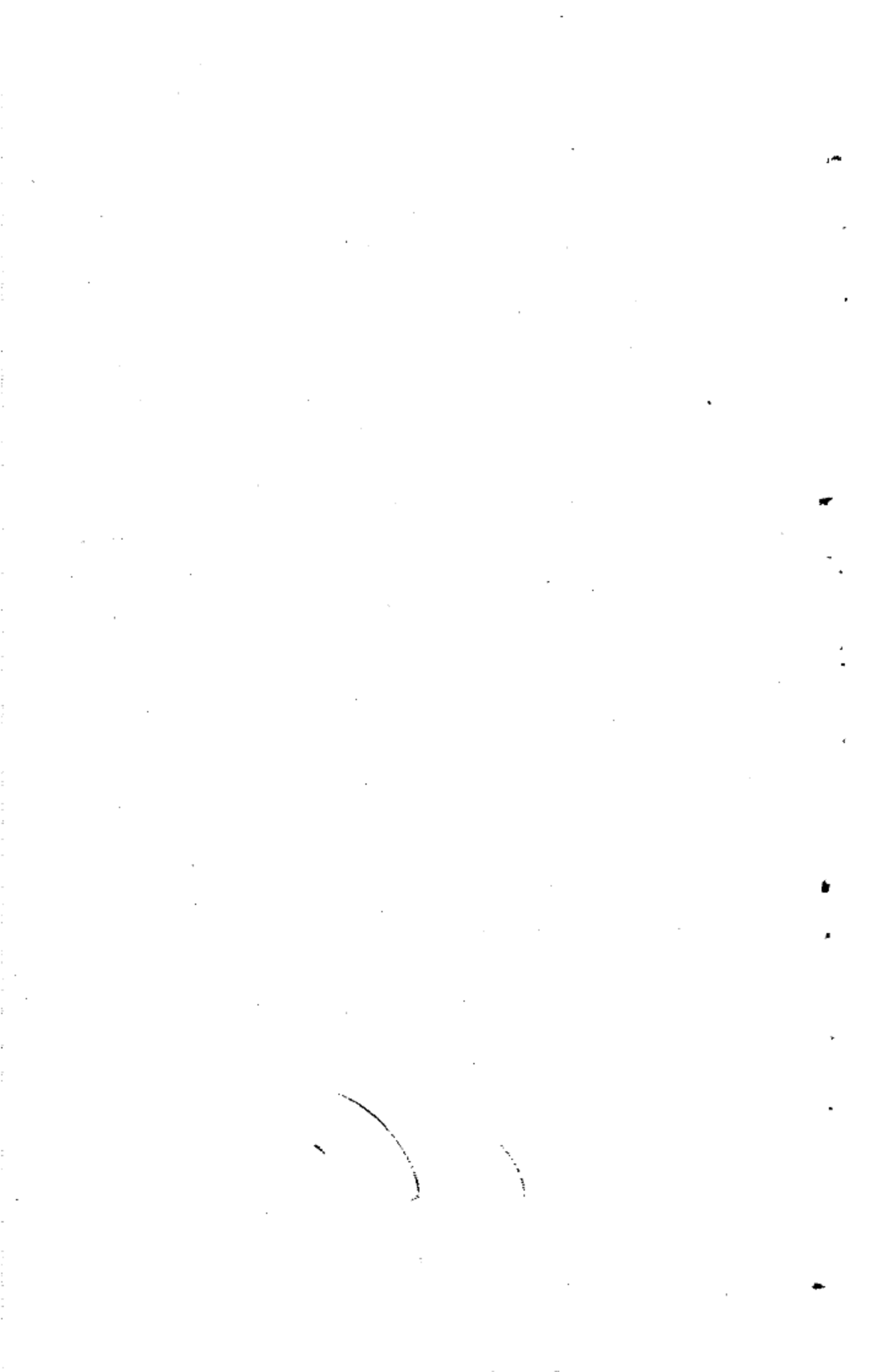


XICO, Distrito Federal. Acuerdo de la Tercera Sala del -
día trece de junio de mil novecientos cuarenta y nueve.

En cumplimiento de lo prevenido por el artículo 186 de la Ley Reglamentaria de los 103 y 107 y en el Acuerdo que celebró esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Presidente Vicente Santos Guajardo y -
Ministros Agustín Mercado Alarcón, Hilarío Medina y Carlos I. Meléndez se negó el amparo a la quejosa. Siendo ponente en este asunto el señor Ministro Vicente Santos Guajardo.-
El C. Mtro. Roque Estrada no intervino en este asunto por -
las razones que constan en el acta del día.

EL PRESIDENTE:

EL SECRETARIO:





T E R C E R A S A L A .

Nombre del promovente: María Luisa González.

Autoridad responsable: Sala del Tribunal Sup. de -
Justicia en el Terr. Norte de la Baja California,

Fecha de la resolución que se recurre:
¿Se niega el amparo a la quejosa? Como lo -
propone el C. Mtro. Santos Guajardo.

M I N I S T R O S

SI		NO
/	MERCADO ALARCON	
	ESTRADA	AUSENTE
/	MEDINA	
/	MELENDEZ	
/	SANTOS GUAJARDO	

Acuerdo del día 13 de junio de 1940.

Por unanimidad de cuatro votos se negó el
amparo a la quejosa. El C. Mtro. Roque Estrada
no intervino en este asunto por las razones --
que constan en el acta del día.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA.

[Signature]
LIC. RAFAEL ROJINA V.

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$
$$E = \frac{1}{\sqrt{\mu_0}} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial A_z}{\partial t} + B_\theta \right) \quad \text{and} \quad H_\theta = -\frac{1}{\mu_0} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial A_z}{\partial t} + B_\theta \right).$$



México, Distrito Federal.- Acuerdo de la -
Tercera Sala del día Trece de junio de mil novecientos --
cuarenta y nueve.

Visto el juicio de amparo D.8834/47/2a. pro-
movido por María Luisa González en contra de actos de la -
Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Te-
rritorios Federales con residencia en el Territorio Norte-
de la Baja California, por violación de los artículos 14 -
y 16 Constitucionales y,

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- La quejosa demandó en juicio or--
dinario civil a Luis Bonardé, exigiendo la declaración ju-
dicial de haberse consumado a su favor la prescripción y-
haber adquirido la propiedad de las manzanas ciento vein--
tiocho y ciento cuarenta y seis adyacentes a la Colonia "Co-
ronita" de Ensenada, Baja California. Manifestó que los ci-
tados inmuebles aparecen registrados al nombre del deman--
dado, habiendo tomado posesión de ellos desde mil novecien-
tos treinta en forma pacífica, pública y continua, con el-
ánimo de adquirir la propiedad. El demandado negó en todas
sus partes la demanda y opuso la excepción de sine actione
agis, contrademandando la reivindicación de los inmuebles,
Manifestó que desde mil novecientos treinta y cinco estu-
vieron ocupados por él y el señor Newt House; que constru-
yó en los mismos tres casas, gallineros y cerca de alambre,
llevando implementos de labranza; que, además plantó y cul-
tivó ochocientas matas de viña y otros árboles frutales, -
habiendo pagado sus contribuciones; que adquirió la propie-

Vo. Bo.
El C. Mtro.
V. Santos
González.

dad en el citado año de mil novecientos treinta y cinco --
y después dió los terrenos en aparcería rural al señor --
Del Giorgio Manzuetto, percibiendo el cincuenta por cien-
to de los productos que se obtuvieron; que el citado aparcero trabajó los citados terrenos durante los tres años siguientes entregando la mitad de los productos; que después dejó de hacerlo alegando que no había tenido buenas cosechas; --
que falleció en agosto de mil novecientos cuarenta y uno --
y entonces la actora se posesionó de los inmuebles los cuales no pudo haber adquirido por prescripción. Previos los --
trámites legales el Juez de Primera Instancia del Partido --
Judicial de Ensenada Baja California, declaró probada la --
acción y no justificadas las excepciones y reconvención que --
opuso el demandado. Apeló éste y por ejecutoria de veinti-
cuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y siete la --
Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Te-
rritorios Federales con residencia en el Territorio Norte --
de la Baja California, revocó la sentencia de primer grado, --
declarando no probada la acción y justificada la reconven-
ción que se hizo valer. En su contra se ha interpuesto el --
presente amparo, solicitando el Ministerio Público que se --
conceda.

SEGUNDO.- Los conceptos de violación se ha-
cen consistir en: 1.- En la sentencia reclamada se afirma --
que el Juez introdujo al debate un hecho nuevo no alegado --
por la actora, consistente en que era concubina de Manzuetto
del Giorgio; que por esta circunstancia violó los artículos-
81, 268, 272, 279, 281, 291 y 298 del Código de Procedimien-
tos Civiles; que carece de razón la responsable, pues el Juez



-3-

sólo decretó la práctica de una diligencia para mejor pro-
veer; que es cierto que no dijo en su demanda ser concubi-
na de Manzuetto del Giorgio, pero que cuando se le interro-
gó sobre el particular, consignó ese hecho que sirvió de--
base al Juez para normar su criterio, sin que pueda esti-
marse, como afirma la Sala responsable, que procedió de --
manera oficiosa al decretar el exámen de los testigos Pe-
dro Loyola Lucq y Luis Grandi; que por otra parte en nada se
afecta el resultado de la acción de prescripción adquisiti-
va, con la circunstancia de que la quejosa haya sido o no-
concubina de Manzuetto del Giorgio. 2.- Es inexacto, que -
el Juez hubiera violado el artículo 281 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, por no ser verdad que haya modificado
substancialmente los hechos alegados por la quejosa. 3.- Que
no pudo quedar desvirtuado el derecho de ésta para adquirir
por prescripción, por la circunstancia de que el Juez haya-
considerado que Manzuetto del Giorgio fué poseedor del pre-
dio, reputando a la agraviada como causahabiente de él, pues
esta se concretó a sostener la existencia de su posesión y-
la probó con las declaraciones de varios testigos, hecho --
que no se afecta porque el citado funcionario haya sosteni-
do la tesis antes mencionada; que al efecto la Sala respon-
sable admite que los testigos declararon de manera unifor-
me, por lo que violó los artículos 419 y 424 del Código de-
Procedimientos Civiles al no darle valor pleno a esa prue-
ba. 4.- La Sala consideró que los derechos posesorios se --
transmiten por herencia y que habiéndose ostentado la quejosa
como heredera de Manzuetto del Giorgio, no probó tal carác-
ter; que esta tesis es falsa por no haber invocado la quejo-

sa el carácter de heredera sino únicamente la disposición -
del artículo 1149 del Código Civil, conforme al cual: "El -
que prescribe puede completar el término necesario para su-
prescripción, reuniendo al tiempo que haya poseído, el que-
poseyó la persona que le transmitió la cosa". 5.- El Tribunal
dió por hecho que Manzuetto del Giorgio era extranjero, afir-
mando que no podía poseer un inmueble en la zona prohibida -
que establece la fracción I del artículo 27 constitucional;-
que la citada conclusión no es exacta porque el artículo se-
refiere a la prohibición de adquirir la propiedad y no la po-
sesión y, además, dió por demostrado que el inmueble se en-
cuentra en la citada zona, sin que conste tal hecho en autos.
6.- En la especie se probaron todos los elementos de la pres-
cripción adquisitiva y, por lo tanto, la sentencia de prime-
ra instancia declaró justificada la acción, sin que exista -
motivo legal para revocarla como lo hizo el Tribunal. 7.- La
responsable consideró probado que Manzuetto del Giorgio era
aparcerero de Bonardi, no obstante que no se exhibió el contra-
to de aparcería que debe constar por escrito. 8.- El Tribu-
nal estimó que la posesión de la quejosa fué de mala fe; que
aún admitiendo este hecho, transcurrieron de mil novecientos
treinta a mil novecientos cuarenta y cinco los diez años --
que exige la ley para adquirir por prescripción, no obstan-
te lo cual, la sentencia reclamada no tomó en cuenta las --
pruebas rendidas sobre el particular. 9.- La Sala violó el-
artículo 813 del Código Civil porque condenó a la quejosa -
a restituir la finca con todas sus construcciones, muebles,-
movientes, útiles, objetos de labranza, frutos, mejoras y-
accesiones. 10.- El Tribunal no le dió valor a las pruebas-




-5-

de la quejosa y sí en cambio a las del actor. 11.- En la sentencia se afirma que la quejosa fué poseedora de mala fe por haber ocupado sin título alguno el terreno en disputa, lo cual es inexacto pues basta entrar a poseer a título de propietario, en forma pacífica y con ánimo de adueñarse de la cosa, para tener buena fe. 12.- La Sala calificó de testigos falsos a los presentados por la quejosa, no obstante que conocían de ciencia cierta los hechos sobre los cuales declararon. 13.- En la sentencia reclamada se le atribuyó mala fe a la quejosa por que promovió una información ad-perpetuam, circunstancia que no puede por ningún motivo servir de base para la conclusión del Tribunal.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La existencia del acto reclamado está justificada con la copia certificada relativa -- al mismo que la quejosa solicitó oportunamente y que fué enviada a esta Suprema Corte por la Sala responsable.

SEGUNDO.- Los conceptos de violación son infundados. Con efecto, tomando en cuenta las actuaciones de primera instancia que se tienen a la vista, aparece que la sentencia del Juez fué incongruente por haber tomado en cuenta un hecho que no fué materia de la litis, consistente en que Manzuetto del Giorgio poseyó el predio en disputa durante tres años seis meses que concluyeron en la fecha de su muerte o sea, el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, habiendo desde entonces poseído la quejosa como concubina de aquél durante cuatro años veintiocho días, por lo que, en concepto del Juez -

 deberían sumarse ambas posesiones, estimando que la quejosa en su citado carácter adquirió la posesión de Manzuetto del Giorgio. En consecuencia, la Sala responsable estimó - fundadamente en los considerandos primero y segundo de su ejecutoria que por no haberse invocado tales hechos en la demanda, la sentencia era incongruente y, violatoria del artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles. Además, no es verdad que la posesión de la quejosa en sí misma pueda producir la prescripción, pues conforme resulta de las constancias de autos y lo declara el propio Juez, tal posesión sólo fué de cuatro años veintiocho días hasta la --- fecha de presentación de la demanda, siendo, por lo tanto, insuficiente pues aún en el supuesto de que tuviere todos los requisitos legales y hubiere sido de buena fe, el artículo 1152 del Código Civil exige un término de cinco años -- para la prescripción de los bienes inmuebles. No es verdad que la quejosa pueda sumar al tiempo que poseyó el que a su vez poseyó Manzuetto del Giorgio, pues aún en el supuesto de que hubiere invocado tal hecho en su demanda fundándose en haber sido concubina de aquél, cosa que no hizo, - dicha consecuencia no se produce ipso jure, sino que para ello hubiera sido necesario que se le declarara heredera - tanto por reunir las condiciones que la ley exige para que la concubina pueda heredar, cuanto por que no hubiere otros herederos legítimos o en su caso testamentarios, pues por disposición de la ley tanto la propiedad como la posesión se transmiten por herencia, siendo en consecuencia fundada la tesis que sobre el particular sustenta la Sala responsable, máxime que ni siquiera la quejosa invocó ese carácter para fundar la prescripción.



-7-

Por lo expuesto y con fundamento, además - en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, -- II y VIII constitucionales, 44, 76, 79, 158, fracción II, 184, 186 y 190 de la Ley de Amparo y 26, fracción I^a de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

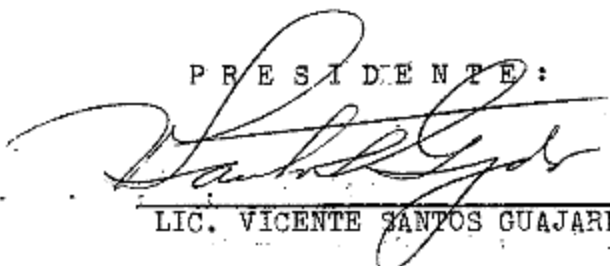
UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara-- ni protege a María Luisa González en contra de la ejecutivo de veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y siete dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales con residencia en el Territorio Norte de la Baja California, al resolver en grado de apelación el juicio ordinario civil seguido por la quejosa a Luis Bonardi.

Notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable, devolviéndole los autos que originales remitió y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de cuatro votos de los señores Presidente Vicente Santos Guajardo y Ministros -- Agustín Mercado Alarcón, Hilario Medina y Carlos I. Méndez, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente en este asunto -- el señor Ministro Santos Guajardo. El C. Ministro Roque -- Estrada no intervino en este asunto por las razones que constan en el acta del día.

Firman los CC. Presidente y Ministros con el Secretario de Acuerdos de la Sala que autoriza y da fe.

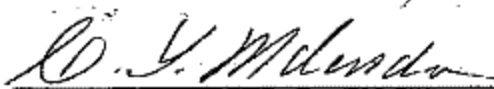
P R E S I D E N T E :


LIC. VICENTE SANTOS GUAJARDO.

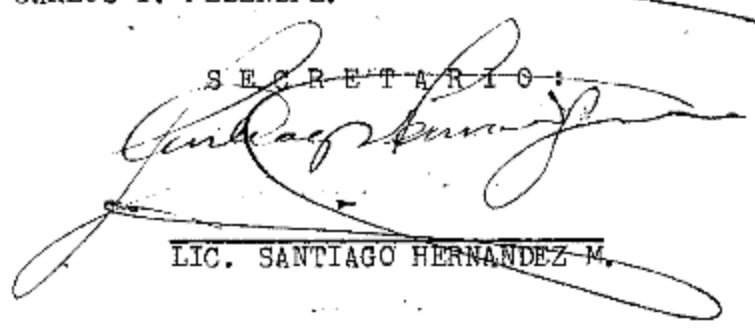
M I N I S T R O S :


LIC. AGUSTIN MERCADO ALARCÓN.


LIC. HILARIO MEDINA.


LIC. CARLOS I. MELENDEZ.

S E C R E T A R I O :


LIC. SANTIAGO HERNANDEZ M.

En 2 Sept 1947 por lista de la firma se
rectificó lo que se anterior, e los que seados
v al Ministerio de la Salud





ASUNTO.- Se remiten autos y testimonio relativos al expediente número 8834/47 formado con motivo del juicio de amparo directo promovido por María Luisa González.

AL C. Presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, del Territorio Norte de la Baja California,
Mexicali, B.C.

SECCION _____

NUMERO 7324.

En virtud de haberse dictado por la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, resolución definitiva en el expediente número 8834/47 formado por la Sección Segunda Auxiliar con motivo del juicio de amparo directo promovido por María Luisa González,

contra actos de esa Sala,

(4)
CON ANEXOS:

con el presente oficio, devuelvo a Ud. en 57, 12 y 58 fojas útiles, los autos que envié con su oficio 858, de fecha 27 de noviembre de 1947; asimismo le remito en 4 fojas también útiles el testimonio de la resolución mencionada.

He de agradecer a Ud. se sirva ordenar que se me acuse el recibo correspondiente.

Reitero a Ud. mi atenta consideración.

México, D. F., a 18 de agosto de 1949.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.


E. MANRIQUE.

1. 關於...
2. 關於...
3. 關於...

4. 關於...
5. 關於...

6. 關於...
7. 關於...

8. 關於...
9. 關於...
10. 關於...

11. 關於...

12. 關於...

13. 關於...
14. 關於...

15. 關於...
16. 關於...

17. 關於...

18. 關於...

19. 關於...

20. 關於...

21. 關於...

Amparo 8834/47 promovido por
MARIA LUISA GONZALEZ.

H. Suprema Corte de Justicia.

Tut

ARNULFO ZARATE PALACIOS, abogado, pro-
moviendo en los autos del amparo indicado en la parte
superior de este escrito, ante V.H. respetuosamente -
comparezco y expongo:

O

Para los usos que convengan al señor
Luis Bonardi, tercero perjudicado en el amparo en que
promuevo, del cual tengo el carácter de apoderado, de
manera atenta solicito que se me expida copia certi-
ficada de la demanda de amparo de la señora María Lui-
sa González y de la sentencia pronunciada por la H. -
Tercera Sala de esa Suprema Corte.

Protesto lo necesario.

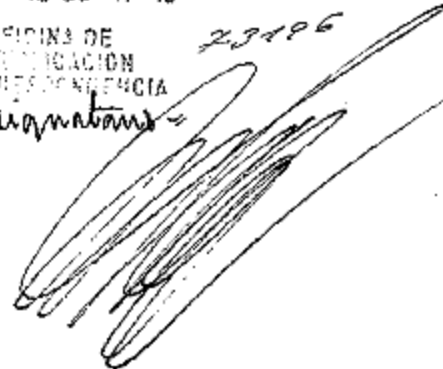
México, D.F. a 22 de agosto de 1949.

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACION

Ago 25 12 25 PM '49

OFICINA DE
CLASIFICACION
Y CORRESPONDENCIA
del signatario

23496



México, Distrito Federal, a treinta de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve.

Agréguese este escrito a sus antecedentes y como se pide.

Así lo acordó y rubrica el Ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy fe.

TR.

[Signature]

En dos de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve se hizo entrega de la copia certificada de lo que se refiere el auto anterior al señor Lic. Arnulfo Harate Palacios y formo por su debido Certe.

[Signature]

[Signature]



116